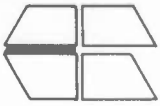


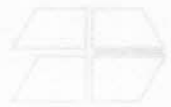
AVANCES
DE
INVESTIGACIÓN



LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA: NIVELES, ESTRUCTURAS, CONTEXTOS, CONCENTRACIÓN Y RACIONALIDAD*

John A. Booth

University of Texas at San Antonio



LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EN AMÉRICA LATINA

A pesar de las exhortaciones que desde hace más de una década se hacen para mejorar y sistematizar la investigación sobre la participación política (Kling, 1964. Flores Olea, 1967), la nutrida literatura sobre el tema aún no ha sido plenamente reconocida. Así, ciertas imágenes tradicionales incompletas y contradictorias aún persisten en la literatura académica (Booth y Seligson, 1978 a). Estos tratamientos varían en forma dramática y sorprendente: mientras que un estudioso asegura que la movilización política de los latinoamericanos va en aumento, otros dos sostienen que la participación masiva es muy baja y que la mayor parte de la actividad política se restringe a las élites socioeconómicas.

Otras visiones presentan la participación política de masas como algo irracional y hacen hincapié en la violencia política¹. Estas nociones tan comunes, a menudo se relacionan entre sí; por ejemplo, una imagen común describe a la mayoría de los latinoamericanos, sobre todo a los campesinos, como políticamente pasivos y apáticos hasta no ser provocados, en cuyo caso pueden irrumpir violentamente en el terreno político (por ejemplo, véase Forman, 1971. Singlemann, 1975. Handelman, 1975 b. Moreno, 1970); así mismo, Wiarda (1974, págs. 4-5) discute cómo la visión de movilización muchas veces se combina con la de la violencia, produciendo la noción de que la creciente conciencia política y participación de los latinoamericanos llevan inexorablemente a niveles de conflictos siempre crecientes (e.i. Schmitt y Burks, 1963. Hadley, 1958. Petras y Zeitlin, 1968. Petras, 1968).

Puesto que se han explicado estas visiones en otras fuentes (Booth y Seligson, 1978 a) no requieren de una consideración detenida. La persistencia de visiones de participación tan inadecuadas y confusas, a pesar de nuevos hallazgos sustanciales, exige una recopilación y resumen de las investigaciones más recientes; tal es el objetivo de este trabajo. La discusión está centrada en cinco preguntas empíricas, claves, sobre la participación de los ciudadanos en las políticas de América Latina:

1. ¿Cuánta participación política hay, cuál es su naturaleza y cuáles son los niveles de participación?

2. ¿Cuál es la estructura de la participación política? Puesto que la presencia de la violencia política en la región está bien documentada (Feierabend y Feierabend, 1966. Feierabend, et al., 1969. Huntington, 1968. Bwy, 1968); el enfoque, aquí, se da básicamente sobre la actividad no-violenta. ¿Hasta qué punto la estructura de participación política no-violenta en América Latina se parece a la de otras áreas del mundo?
3. ¿En qué forma las diferencias en la naturaleza del contexto sociopolítico o del ambiente afectan la estructura de la participación?
4. ¿Cuál es el grado de concentración de la participación política? ¿Hasta qué punto la participación está monopolizada por personas de los status socioeconómicos más altos o por activistas políticos?
5. ¿Es racional la participación política de las masas en América Latina? ¿Hasta qué punto los individuos actúan políticamente sobre la base de orientaciones hacia metas e imágenes de canales eficaces?

Aunque éstas no agotan todas las preguntas importantes sobre la participación en América Latina ², las contestaciones tentativas actualmente disponibles tienen implicaciones decisivas para nuestra comprensión de la política en la región y para las orientaciones de investigación en el futuro.

La definición de participación política

Tradicionalmente, ha existido poco consenso entre los estudiosos de la participación política sobre lo que el término debe abarcar. Milbrath (1965, pág. 1) sostiene que la definición no debe ser tan amplia que pierda su utilidad analítica o su capacidad de enfoque. Pero otros (Verba y Nie, 1972, pág. 2. Pateman, 1970. Euben, 1970) advierten que la definición no debe ser demasiado restringida y sobre todo que no debe incluir únicamente el comportamiento relacionado con partidos políti-

cos y elecciones. En busca de una definición de participación política que incluiría un alcance adecuado de acción política, Mitchell, Seligson y yo, hemos empleado el concepto de bienes públicos como un tema central (Booth y Seligson, 1978 a). Derivado de los estudios de la economía política, de comportamiento electoral (Downs, 1957. Tullock, 1968. Czudnowski, 1976), el enfoque es original sólo en la medida que se aplica a los análisis más amplios de participación política en general y al área de la política latinoamericana (Chaffee, 1976).

Los bienes colectivos son aquellos bienes que, una vez suministrados a un miembro de la colectividad, no pueden ser fácilmente negados a los otros del mismo grupo. Entonces, los bienes colectivos se distinguen de los bienes privados por el grado de control que sobre su uso queda en manos de quien los suministra, mientras que el acceso a los bienes privados puede ser fácilmente controlado por su suministrador, el acceso a los bienes colectivos no tiene esa característica (Olson, 1968, págs. 14-15).

Los bienes públicos, base de la definición de participación política, son una clase especial de bienes colectivos suministrados por los gobiernos o por las comunidades, por medio de sus gastos colectivos. La seguridad nacional y los sistemas monetarios nos dan ejemplos clásicos de bienes públicos; los gobiernos los suministran y, una vez que existen para un ciudadano, existen efectivamente para todos. Pero las comunidades (aldeas, vecindarios) también suministran bienes públicos, aunque carecen de gobiernos formales. Aldeas y pueblos, se proveen a menudo de bienes públicos tales como carreteras, centros comunales y escuelas, a través de gastos colectivos de recursos tales como dinero, trabajo y materiales aportados por miembros de la comunidad. Vemos un ejemplo excelente de esta clase de suministro comunal de bienes públicos leyendo la descripción de Adams (1959; pág. 177) de la aldea peruana de Muquiyaayo: "Proyectos importantes de desarrollo comunal son llevados a cabo cada tantos años. Como las demás aldeas en la región, Muquiyaayo tiene una larga historia de obras comunales. . . principalmente de dos tipos: en primer lugar, actividades de mantenimiento, tales como la reparación de calles y puentes. . . las cuales se

realizan constantemente. La segunda clase de trabajo incluye grandes proyectos especiales en que se hace un agregado o una alteración al equipamiento material de la comunidad”.

Basándose en estos conceptos, se define la **participación política** como **comportamiento que influye o pretende influir en la distribución de bienes públicos**. Así, cuando un ciudadano o un miembro de la comunidad trata de afectar la distribución de un bien público, él o ella ha participado políticamente.

La participación política, no incluye los esfuerzos para influir en la distribución de los bienes privados controlados por el Estado (como licencias o patentes, los cuales son controlados por su venta). Algunos ejemplos de las aplicaciones de esta definición en el contexto latinoamericano ilustrarán tanto sus implicaciones como su utilidad. Una carretera nos da un ejemplo excelente de un bien público: normalmente se construye mediante el gasto gubernamental o comunal y una vez construida sería difícil restringir su uso.

En una región rural vinculada inadecuadamente por carreteras a los centros de suministros a los mercados, los intentos por parte de los residentes de construir por sí mismos una carretera o de persuadir al gobierno de hacerla, constituyen la participación política. En el mismo sentido, las acciones que tomen los ciudadanos para fortalecer o socavar la estabilidad de un régimen determinado también constituirían la participación política. La estabilidad de un régimen político es un bien político (bien en el sentido económico y no en el sentido ético moral), porque los gobiernos estables pueden asegurar ciertas ordenaciones económicas, sociales o políticas beneficiosas a ciertos sectores de la sociedad. Entonces, el apoyo o la posición activa a un régimen involucra intentos de influir en la distribución del bien público y, por lo tanto, es participación política³.

Para aclarar esta definición y su aplicación, hay que mencionar brevemente algunos temas, los cuales surgen a menudo en discusiones sobre la naturaleza de la par-

ticipación política. Primero, la participación requiere la acción —comportamiento abierto— y no actitudes o creencias. Puesto que se puede considerar la estabilidad gubernamental como un bien público, el apoyo activo al gobierno constituye participación política.

Algunos (Weiner, 1971. Woy, 1978) han sugerido que la acción política constituye participación política sólo en la medida que sea eficaz, vale decir, que influye realmente en algo. Exigiendo tal clase de influencia como un *sine qua non* de participación, se llegaría a la errada conclusión de que alguien que votó o apoyó activamente a un candidato perdedor de una elección, en realidad no ha participado. Entonces, esta definición no requiere influencia efectiva, únicamente el intento de influir en la distribución de bienes públicos. La definición tampoco exige la intencionalidad, el conocimiento consciente de actuar políticamente.

En América Latina, donde la participación del Estado en los asuntos laborales es normalmente amplia, la huelga —esencialmente un acto económico— a menudo tiene vastas implicaciones para la distribución de bienes públicos, haciendo caso omiso de las intenciones del trabajador. La participación política no ocurre exclusivamente dentro del terreno político, ya que muchos bienes públicos existen y son distribuidos fuera del gobierno formal. Finalmente hay que tomar en cuenta que la participación política no tiene que ser de tipo **convencional**, vale decir, que no tiene que ser ni legal ni aceptable al régimen; la acción de cualquier tipo, violenta o no, legal o ilegal, dirigida hacia la redistribución de los bienes públicos involucra participación política.

Una ventaja de esta definición es la gama de comportamientos políticos que abarca. Tal gama facilita un enfoque de la actividad política de los ciudadanos que tiene más alcance que el enfoque tradicional sobre las elecciones y los partidos políticos que dominaban la investigación sobre la participación latinoamericana antes de 1970, y que todavía es una tendencia importante hoy día⁴. Una segunda ventaja de este enfoque se encuentra en sus implicaciones teóricas. Al examinar dentro de los

sistemas sociales cómo se relaciona el comportamiento individual con la distribución de los bienes públicos, hay que considerar necesariamente al actor político dentro del contexto más amplio de procesos y estructuras económicas, políticas y sociales. El analista debe ir más allá del individuo para examinar "los efectos recíprocos de la interacción entre el Estado y el participante político" (Booth y Seligson, 1978 a).

Niveles de participación

El primer interrogante se refiere a cuánta participación no-violenta se da en América Latina. La respuesta probablemente sorprenderá a los que creen todavía que la inactividad política caracteriza las masas en la región. Un desglose de los niveles de los varios tipos de actividad entre los padres de familia costarricenses, nos muestra tasas de participación más altas de las que se hubiera esperado (Booth, 1976). Más de la mitad de la población pertenecía por lo menos a una organización voluntaria, moderadamente activa en el liderazgo y la asistencia a las organizaciones y ha participado en por lo menos un proyecto de desarrollo comunal de algún tipo. De hecho el 84 0/o reportaron haber votado en la elección de 1970, una cifra que se aproxima mucho a la votación oficialmente reportada de 83,3 0/o (Tribunal Supremo de Elecciones, 1970). Más del 30 0/o de los informantes discutían sobre política ocasionalmente ⁵ y han tenido contacto por lo menos con un funcionario público. Más del 20 0/o, discutían la política local, por lo menos de vez en cuando y habían sido miembros de un partido político, mientras que el 10 0/o o más habían tenido contactos con un diputado de la Asamblea Legislativa, con un regidor, o con un ejecutivo municipal. En general, el informante promedio había participado en 3,6 de los diecisiete tipos de actividad examinada (la media=2,8), y solamente uno de cada siete no había participado en ninguna actividad.

Un argumento, razonable, del por qué los costarricenses exceden en mucho la norma latinoamericana sobre la participación, puede ser el de su tradición liberal constitucionalista y a un sistema activo de partidos. Sin embargo, los datos prove-

nientes de otros países latinoamericanos, rechazan rápidamente esta hipótesis. Tomando en cuenta las votaciones se nota que los latinoamericanos son votantes activos allí donde los regímenes permiten elecciones.

En la década 1961-1970, Costa Rica rebasó ligeramente el promedio (38 0/o) de votantes registrados en América Latina, expresado como un porcentaje de la población total. Los porcentajes, para este fenómeno van desde el bajo 19 0/o en Guatemala, hasta el 58 0/o en Uruguay; los costarricenses están entre los votantes más activos de América Latina, más del 80 0/o de los votantes registrados concurren a las urnas en comparación con promedios de 53 0/o en Colombia, en 1970, y 95 0/o en Perú en 1963 (Willems, 1975, págs. 288-291). En la elección presidencial de 1973, más del 90 0/o de los venezolanos votaron (Martz y Baloyra, 1976). Para hacer más referencias comparativas, los porcentajes de votantes en elecciones nacionales son 55-60 0/o en los Estados Unidos (Campbell, et al., 1964, pág. 49), cerca de 95 0/o en Austria y cerca de 60 0/o en India (Verba, et al., 1971, pág. 36). Hay que agregar una advertencia: las estadísticas de votación en América Latina deben ser comparadas con mucho cuidado por dos razones:

Primero: la exactitud de las cifras es sospechosa debido al fraude electoral en ciertas situaciones.

Segundo: la votación es obligatoria en algunos países, tales como Méjico, Costa Rica y Venezuela, un hecho que aumenta claramente la concurrencia a las urnas electorales (véase por ejemplo, Booth, 1975 a, pág. 91, para datos sobre el aumento en la concurrencia a las urnas cuando la votación se hizo obligatoria). Sin embargo, aun cuando la votación sea obligatoria, no se universaliza, dejando de votar entre el 10-15 0/o en las democracias de Costa Rica y de Venezuela.

El activismo electoral y partidario está comprendido en el segundo modo de actividad política (véase más adelante para una discusión sobre la estructura modal de participación). Con fines de comparación, Verba, et al. (1971, pág. 36) presenta da-

tos que permiten estimar que cerca de la quinta parte de la población en edad de votar en Austria, Japón, India, y los Estados Unidos se compromete en algún tipo de actividades de campaña. Biles (1978) informa que en 1970 cerca del 6 0/0 de los uruguayos urbanos pertenecían a un club o partido político y que cerca del 13 0/0 habían hecho campaña electoral o habían contribuido con dinero a algún candidato. Baloyra y Martz (1978) informan que había mucho más actividad electoral en Venezuela en 1973; casi cerca de 3/4 partes del electorado se exponía a los estímulos de campaña; y casi la mitad se comprometía activamente (trabajo voluntario, trabajo propagandístico, asistencia a reuniones, etc.).

Los niveles de contacto con funcionarios públicos reportados por los costarricenses, caen dentro de los límites reportados por Cornelius (1974, pag. 1.135) para algunas otras naciones latinoamericanas. Los contactos de este tipo registrados por moradores de algunas comunidades de clase baja en Méjico, Perú, Brasil y Chile varían del 6 0/0 al 42 0/0. Cerca del 11 0/0 de los residentes de Montevideo admitieron que habían recibido alguna ventaja del contacto con funcionarios públicos (Biles, 1978). Para naciones fuera de América Latina, Verba, et al. (1971) reportan en varios tipos de contacto de un 1-10 0/0 en Nigeria (el más bajo) y de un 3 a 16 0/0 en Austria (más alto).

Con respecto al activismo comunal en la solución colectiva de problemas, hay pocos análisis que provean datos cuantitativos de América Latina. No obstante, muchos estudios (por ejemplo, Adams, 1959. Roberts, 1973. Fagen y Tuohy, 1972. Fishel, en prensa. Castillo, 1964. Doyghty, 1968. Dobyns, 1964) informan detalladamente sobre la existencia del activismo comunal en una amplia variedad de situaciones, tanto urbanas como rurales. Dietz y Moore (1977, pag. 27) informan que el 73 0/0 de los residentes de seis barriadas limeñas participaron en algún esfuerzo de desarrollo comunal. Booth y Seligson (1979), utilizando dos conjuntos de datos independientes, confirman que alrededor de dos terceras partes de los campesinos costarricenses han participado en la resolución de algún problema comunal.

Una comparación final ubicará a América Latina en una perspectiva transregional y transcultural. En otro trabajo he mostrado que el nivel promedio de la actividad de los costarricenses en votación, por tendencia partidaria, asistencia a reuniones políticas, activismo comunal y contacto con funcionarios públicos (Booth, 1975 a, págs. 109-110; 1976, pág. 629) los ubica apenas menos activos que los austríacos, los norteamericanos y los japoneses (Kim, et al., 1974). Puesto que estos niveles para Costa Rica son bastante similares a los del resto de América Latina, habría que concluir que los niveles de participación de masas en América Latina se distinguen muy poco de los de otras naciones.

La estructura de la participación

¿Cuál es la estructura de participación política en América Latina y cómo se compara con la de las otras regiones del mundo?

Refiriéndose principalmente a los Estados Unidos y Europa Occidental, Berelson, et al. (1954), Lane (1954), Hilbrath (1965), han descrito la participación política como un fenómeno unidimensional, compuesto en primer lugar, por actividades electorales; sin embargo, investigaciones recientes en siete sociedades: Estados Unidos, tres naciones europeas y Japón, India y Nigeria (Verba, et al., 1971. Verba, et al., 1973), han revelado que la participación no-violenta en cada una de estas sociedades, se compone, usualmente, de varios factores o formas independientes que incluyen la votación, la campaña electoral, el contacto con funcionarios públicos, la actividad cooperativa en la comunidad. Pero, ¿cómo está compuesta la situación en América Latina? ¿Aparecen tales modalidades no-violentas de comportamiento político claramente delineadas en sociedades de esta región cultural?

En mi análisis factorial (1975 a, 1976) de diecisiete variables de participación dados entre los cabeza de familia costarricenses se aislaron seis factores de participación política: la votación, el activismo partidario (como la campaña electoral de Ver-

ba), el contacto con funcionarios públicos, la comunicación política, la actividad de grupos de presión (como la actividad comunal de Verba) y el activismo en el desarrollo comunal. Así, cuatro de las dimensiones de actividad política de masas, entre la muestra de probabilidades a nivel costarricense, se parecen a las halladas en otras regiones del mundo. Otros estudios de América Latina informan de varias dimensiones no-violentas de participación política y confirman el argumento de Verba, et al., de que la estructura modal puede alterarse según el ambiente particular (véase más adelante). El estudio de Biles (1978) de una amplia gama de actividades políticas de los uruguayos urbanos, reveló cuatro modos de participación en 1970: votación, comunicación política, actividad comunal y campaña electoral-contacto particularizado. Baloyra y Martz (1978) demuestran que en Venezuela, en 1973, el activismo de campaña electoral, concebido en otros lugares, como una dimensión única, en realidad consiste de dos subdimensiones separadas: exposición a la campaña y compromiso en la campaña. Estudios desarrollados en Ecuador (Moore, 1977, en prensa) y en Perú, (Dietz, 1977. Dietz y Moore, 1977) han hallado varias dimensiones de participación política en estos contextos autoritarios. A pesar de la ausencia de la votación, el detallado examen de Dietz y Moore, sobre la participación entre los precaristas de seis barriadas en Lima, revela una modalidad de resolución de problemas comunales, una forma de actividad organizacional, contacto con funcionarios locales y, contacto con funcionarios nacionales. Seligson y Booth (en prensa) muestran que la estructura modal de participación política en una corte transversal de la muestra de costarricenses urbanos (no solamente los pobres) se distingue de la de los campesinos en consonancia con los contextos demográficos y organizativos entre la ciudad y el campo.

En resumen, la participación política en naciones latinoamericanas, como en otros contextos, exhibe una estructura multidimensional. Aunque hay muy pocos estudios basados en encuestas sobre sociedades latinoamericanas completas, como para permitir una comparación global de la región con las estructuras participatorias halladas por Verba, Nie y sus asociados (1971, 1972, 1973), los estudios desarrollados hasta la fecha no han producido ninguna desviación sorprendente de la expectativa de modalidades múltiples. Las formas de la acción ciudadana, sin embargo, no son

iguales siempre. La sección siguiente muestra, que los contextos políticos, económicos y sociales pueden alterar la estructura de participación de una sociedad a otra, o dentro de una sociedad de un sector al otro.

Los determinantes contextuales de participación

¿Hasta qué punto y de qué manera el contexto o el ambiente político y socioeconómico influye en la participación política? Estudios hechos por Verba, Nie y Kim (1971) y Verba, et al. (1973), comparan formas de actividades ciudadanas en siete naciones y concluyen que la constitución y el tipo de régimen explican las diferencias estructurales halladas entre Nigeria y Yugoslavia y otras cinco naciones; Leeds y Leeds (1976, pág. 193) se atreven a sostener que virtualmente todas las diferencias en el comportamiento político de los pobres de las zonas urbanas en tres naciones latinoamericanas, radican en los factores contextuales. ¿Son tan importantes los fenómenos contextuales? En la siguiente discusión, las evidencias de los efectos ambientales sobre la actividad política se dividen según sean estudios **comparativos** en regímenes políticos, por un lado, y, por otro, en estudios en el ámbito de los sistemas particulares ⁶.

Al comenzar con las comparaciones sobre los impactos de los sistemas de participación, hallamos que las informaciones asumen dos formas básicas: comparaciones de sistemas políticos nacionales distintos y análisis de los cambios de régimen dentro de sociedades particulares. Primero, como está indicado en las secciones anteriores, tanto las estructuras como los niveles de participación política, varían de acuerdo con el contexto nacional. Desde luego, se destacan los regímenes autoritarios que limitan drásticamente o suprimen completamente la votación y mucha actividad partidaria. El estudio de Biles (1978) sobre Uruguay observa otro tipo de efecto contextual, las formas de campaña electoral y de contacto personalizado (separados normalmente), se combinan en una misma modalidad. Biles teoriza que ello radica en el fuerte y prolongado modelo de política de patronazgo (Weintein, 1975) que ha

transformado los clubes y partidos políticos en intermediarios casi omnipresentes entre las demandas de los ciudadanos y el Estado.

Leeds y Leeds (1976) analizan cuidadosamente el impacto de un tipo de régimen sobre la actividad de los pobres urbanos en Brasil, Perú y Chile. Hallan que las diferencias en el número de partidos políticos con una base popular, dentro de cada sociedad, altera las tácticas, estrategias, y éxitos de los pobres de la zona urbana en la consecución de los bienes públicos. En Brasil, donde las élites de los partidos han evitado la organización de las masas, los moradores de las 'favelas' han recurrido a 'cambios de intereses' (trocas de intereses), arreglos informales y temporales pero sofisticados para regatear apoyo potencial a candidatos en competencia, a cambio de mejoras específicas y servicios.

En Perú, donde únicamente el APRA ha tenido una base de masas, los otros partidos han intentado neutralizar esta ventaja a través de tácticas de captación de la masas. Los cambios frecuentes en las élites dirigentes han producido una proliferación masiva de la burocracia conforme los gobiernos sucesivos crean nuevos organismos y programas para los pobres de las zonas urbanas. La respuesta normal de la **barriada peruana** ha sido:

- 1) Dirigir peticiones a las burocracias, las cuales duran más que los gobiernos y son más confiables que los partidos; y
- 2) manipular los múltiples y a veces competitivos programas nacionales e internacionales de asistencia para lograr las máximas ventajas.

En Chile donde antes de 1973, varios partidos políticos tenían amplias bases de masas, la competencia ha sido intensa para el apoyo electoral de las masas urbanas. En las **callampas** (formadas informalmente por aumento gradual de los residentes) y en las **poblaciones** (asentamientos planificados por el gobierno), los moradores han manipulado con cuidado a los órganos del partido en competencia para conseguir

ayuda. Sin embargo, en los campamentos (normalmente formados por invasiones organizadas por los partidos), los moradores han buscado bienes públicos a través de los vínculos burocráticos suministrados por el partido que organizó la invasión.

La comparación de Walton (1976, págs. 134-135) entre dos ciudades mejicanas y dos colombianas, explica cómo las características políticas y económicas de las élites urbanas afectan la naturaleza y el éxito de las peticiones de los grupos de los estratos bajos. Encuentra similitudes entre Cali y Monterrey, donde las élites suministran menos bienes públicos a los grupos de los estratos bajos que en Medellín y Guadalajara. En estas últimas se otorgan concesiones políticas más amplias en respuesta a las peticiones de los estratos bajos, y ello ocurre porque la élite económica de Medellín depende de la cooperación de los estratos bajos para garantizar una fuerza laboral estable y porque los líderes burocráticos de Guadalajara necesitan proyectos de desarrollo exitosos para promover sus carreras dentro del PRI a nivel nacional. La "vulnerabilidad" de la élite (Portes y Walton, 1976, págs. 172-175), que podría ser explotada en Medellín y Guadalajara, está a un nivel más bajo en Monterrey, donde ésta se encuentra menos presionada por el PRI, debido a divergencias políticas, y en Cali, donde las líderes del sector empresarial tienen una fuerza laboral amplia y estable. Los hallazgos de Walton, y de Leeds y Leeds, sugieren que una variable contextual estratégica involucra la naturaleza de la élite. Una combinación de competencia intraélite y dependencia sobre los grupos de los sectores bajos, parece promover canales alternativos para las peticiones de las masas y alentar tales peticiones.

Estudios recientes de sistemas de seguro social en América Latina (Mesa-Lago, en prensa. Malloy, 1977. Rosenberg y Malloy, 1978), detallan cómo el aumento en la participación de oleadas sucesivas de sectores de intereses emergentes, ha creado sistemas injustos y funcionales. Estos han gravado onerosamente los recursos económicos y políticos nacionales. Esfuerzos para reformar tales programas han tenido éxito solamente donde regímenes autoritarios han tomado el poder y han reprimido la participación de los grupos de presión en la formulación de políticas de seguro social. Así, donde regímenes civiles han dependido del apoyo popular, se ha animado

la política de grupos de presión. Desgraciadamente, han sido las instituciones militares las que han poseído la solidaridad interna y el poder para reformar exitosamente las políticas públicas deformadas, pero esto a costo de la represión en contra de la participación.

Estudios sobre los cambios de regímenes al interior de los países, nos proveen otros ejemplos de efectos contextuales sobre la participación. Por ejemplo, Collier describe en detalle, cómo los cambios en la política de los regímenes peruanos sucesivos, desde la década del 50 han alterado el trato gubernamental hacia los pobres de la zona urbana, y cómo el comportamiento político del pueblo ha cambiado, en respuesta a ello. Las barriadas y la política pública hacia las barriadas han sido utilizadas como un medio de vincular a los pobres de la zona urbana al Estado, visualizado por los poderosos como constructivo, en vez de destructivo (1975, pág. 37). Así, tal como las élites sucesivas han tratado de controlar la participación; la política ha promovido la movilización de los pobladores en apoyo de Odría (1948-1956), la actividad de ayuda propia bajo el gobierno de Prado (1956-1960), la participación electoral masiva es seguida por frustración durante el período de gobierno partidario (1961-1968) y, bajo el régimen militar, la ayuda propia, y la movilización extrapartidaria (1968-1975). (Véase también Woy, 1978. Dietz y Palmer, 1978. Palmer, 1973. Palmer y Middlebrook, 1976, y Palmer y Rodríguez, 1972).

Shepard Forman sostiene que "la naturaleza de la lucha por el poder (de la élite brasileña), también ha determinado en todo momento, la naturaleza de la participación política campesina", (1975, págs. 143-144). El delinea cómo estas luchas han transformado la participación política campesina: en la medida en que las élites locales han sido gradualmente suprimidas por las élites nacionales centralizantes, la actividad política campesina no se ha independizado, sino que ha cambiado del patrón "dependencia a un terrateniente local a un patrono clientela" de distintas instituciones nacionales. Desde 1964, por supuesto, el régimen militar ha reducido drásticamente tal actividad. El análisis de Brian Loveman (1976) sobre la organización sindical cam-

pesina chilena desde 1919, demuestra que la manipulación oportunista de los partidos izquierdistas con base urbana, en pos de sus propias metas, ha provocado oleadas sucesivas de huelgas rurales, animadas por la oposición para debilitar al gobierno de turno. Tan pronto ha cambiado el régimen, los partidos normalmente, han apoyado una renovada represión de los sindicatos rurales. Loveman nota también cómo el acceso al poder de la Unidad Popular, en 1970, provocó un crecimiento dramático de activismo campesino, porque la izquierda se encontraba finalmente libre para competir más abiertamente para apoyar las masas y se alejó de su vacilante política. Adams (1970) traza la evolución de las estructuras de poder político en Guatemala desde 1944 a 1966, subrayando la expansión inicial (1944-1954) y el encogimiento subsiguiente (1954-1966) de la participación política entre varios sectores sociales, al cambiar los regímenes y sus ideologías, de revolución a contrarrevolución, con el aumento correspondiente de la solidaridad de la élite dirigente (véase Booth, en prensa).

Los numerosos estudios que tratan de los efectos contextuales sobre la participación política al interior de los regímenes se subdivide en dos grupos: los que comparan las actividades de los distintos sectores sociales y los que examinan las diferencias al interior de un mismo estrato social. En el primer grupo Fagen y Tuohy (1972) comparan la actividad de los residentes de la clase alta, media y baja en Jalapa, capital de una provincia mejicana. Informan que los índices del contacto con funcionarios públicos, la pertenencia a grupos políticos, la pertenencia a un partido, los intentos de influir en las decisiones públicas y la campaña electoral, son más altos, en los grupos del sector alto, son intermedios para la muestra de la clase media, y son más bajos para los pobres. Además, hallan que esta desigualdad está acentuada por el aspecto educativo; finalmente, se muestran 'sorprendidos' del "grado desproporcionado en que la clase alta disfruta de ciertas ventajas políticas en un marco institucional que está ostensiblemente orientado para servir a los intereses de las clases media y baja" (1972, pág. 87). Definitivamente, la estructura del sistema político mejicano, impone obstáculos significativos a la participación de los individuos de status bajos.

Varios estudios costarricenses informan también sobre diferencias significativas en cuanto a la participación entre los distintos estratos sociales. Seligson y Booth (1979), comparan el activismo político entre gente de la ciudad y campesinos. Informan que hay pocas diferencias estructurales en los modos de actividad, pero hallan que los pobladores urbanos aventajan a los campesinos en cuanto a la participación política nacional (votación y contacto con funcionarios), mientras que los campesinos se comprometen más en proyectos y grupos de desarrollo comunal. Otros estudios costarricenses que examinan el impacto de la región (Booth, et al., 1973. Booth, 1974) y el tamaño de la comunidad (Booth, et al., 1973. Booth, 1975 a, 1975 b), informan que hay más actividad nacional y menos participación comunal entre los que viven en comunidades grandes y céntricas, mientras que se da el caso contrario en pueblos y aldeas pequeñas o aisladas.

El hilo común de estos informes es la diferencia notable en los servicios públicos aislados controlados por región, tamaño de comunidad y condiciones rural-urbanas. Cada estudio concluye que una causa importante para que se hagan esfuerzos intensivos a fin de resolver problemas comunales, por parte de los residentes de las zonas rurales periféricas y de las aldeas, la constituye la falta de servicios básicos a los que tienen que enfrentarse. Los residentes de la ciudad de la región central y de los grandes pueblos gozan de muchos servicios básicos suministrados por el gobierno, reduciéndose así el ímpetu por el sistema comunal. Otro efecto contextual radica en los costos y beneficios de la participación en un sistema político altamente centralizado. Las instituciones gubernamentales y los servicios que se distribuyen, son de fácil acceso para los residentes del centro metropolitano costarricense, pero son lejanos y costosos para los aislados del centro. Estos costos diferenciales de acceso y la distribución desigual de los beneficios de la participación en el terreno nacional, explican mucho de la variación observada en la votación, en el contacto con funcionarios públicos, y en la actividad de grupos de presión entre comunidades de distintos tamaños, entre los estratos urbanos y rurales y entre las regiones céntricas y periféricas de Costa Rica.

El último grupo de estudios penetra en los efectos contextuales dentro de un estrato social determinado. Por ejemplo, Seligson (1978) evalúa el efecto de los niveles de desarrollo económico sobre cuatro formas de actividad ciudadana entre el campesinado. Halla que los bajos niveles de desarrollo económico, aumentan los niveles de activismo de grupos, el contacto con el gobierno local, la actividad de desarrollo comunal y la votación. Concluye: "En áreas donde la infraestructura está pobremente desarrollada y los servicios gubernamentales son mínimos, los individuos se ven obligados a participar políticamente si esperan ver alguna mejora". (1978, págs. 151-152).

Bourque y Warren (en prensa) examinan las diferencias en la participación entre las mujeres de dos comunidades rurales peruanas y relatan un efecto contextual significativo. Notan que las mujeres de una aldea tradicional del altiplano, donde los hombres controlan los procesos económicos claves, participan políticamente menos que las mujeres de un pueblo comercial nuevo. Bourque y Warren atribuyen esta diferencia al mayor poder económico de la mujer del pueblo comercial, muchas operan negocios independientemente de los hombres. Handelman (en prensa), señala que los trabajadores en los sindicatos mejicanos afiliados al PRI muestran una baja actividad política, pero los miembros de los sindicatos radicales de los trabajadores de la industria eléctrica, participan con una tasa notablemente más alta. El atribuye esta variación intraclase, a las diferencias ideológicas entre los dos tipos de sindicatos.

Cornelius (1973, 1975, págs. 110-134) examina el impacto del contexto socioeconómico sobre la actividad política de los pobres de la Ciudad de Méjico. Demuestra que los distintos vecindarios tienen culturas políticas específicas, a partir de indicadores agregados sobre índices de 'conciencia cívica', disposición a conformarse con las normas comunales, percepción de amenaza externa y poder de la orientación del poder hacia la ayuda propia. Estos atributos comunitarios producen variaciones significativas de un barrio a otro en un índice general de participación, aun con controles para el status socioeconómico (SSE), duración de residencia, y compromiso psicológico (1975, pág. 114). Cornelius detalla también (1975, págs. 124-132 con muchas

referencias útiles a otras investigaciones) diez distintos aspectos del contexto social y material que influyen en la participación entre los pobres de la ciudad. Aunque la segmentación interna, la baja densidad de la población, y su gran tamaño, reducen la participación dentro del barrio, varios factores aumentan la actividad: la homogeneidad del SSE, la estabilidad de residencia, las limitaciones, el establecimiento por invasión, las amenazas externas, la represión, el éxito a peticiones previas a la autoridad, el liderazgo orientado y las asociaciones voluntarias hacia asuntos locales, y "necesidades de desarrollo" tales como falta de títulos de propiedad y de servicios públicos básicos. (Para otros estudios que citan efectos contextuales similares sobre la participación de los pobres de la ciudad, véase Goldrich, et al., 1967. Perlman, 1975, 1976. Portes, 1969. Roberts, 1973. Dietz, 1974. Moore, 1977, y también la bibliografía en el trabajo de Cornelius, 1973).

Para resumir, la participación política en América Latina manifiesta diversas influencias contextuales. La estructura (en evolución) de instituciones sociopolíticas provee un cuadro dentro del cual los ciudadanos tratan de influir en la distribución de bienes públicos. Las estructuras constitucionales, los tipos de regímenes, las interacciones de las élites y las configuraciones institucionales, determinan la oportunidad, los canales para, y los costos de la participación, influyendo así en los niveles, la estructura, la estrategia, las tácticas y el sistema de influencia de la actividad política. Cambios en tales fenómenos estructurales pueden producir alteraciones dramáticas en los patrones de los esfuerzos de los ciudadanos por tener injerencia en la distribución de los bienes públicos nacionales. A niveles más bajos, dentro de los sistemas sociales, fenómenos tan variados como la disponibilidad de servicios públicos, la cultura política local, el tamaño de la comunidad y los patrones de residencia, suministran cuadros similares que determinan los motivos, las tácticas, los modos y la intensidad de la actividad política. Lo que Portes ha dicho acerca de los latinoamericanos pobres de la ciudad, parece apropiado para aplicarlo a la mayor parte de los otros sectores sociales, el comportamiento político es: "la adaptación racional a lo que las circunstancias estructurales permiten y alientan" (1976, pág. 108).

La concentración de la participación

¿Hasta qué punto está concentrada la participación política en América Latina, o sea, monopolizada por activistas políticos militantes o por personas con un alto status socioeconómico?

En los Estados Unidos, la participación política tiende, de alguna manera, a la concentración; así los individuos que ejecutan las tareas más difíciles y que gastan más tiempo, también ejecutan las más fáciles. Aún más, la participación es distribuida desigualmente con mucha gente participando a niveles bastante bajos, y bastante menos actuando en un gran número de actividades (Verba y Nie, 1972, págs. 25-35. Milbrath, 1965, págs. 16-21. Matthews y Prothero, 1966, págs. 52-58. Lane, 1959, págs. 93-94).

MI investigación sobre la muestra nacional de probabilidad de 1.442 cabezas de familia costarricenses, ha revelado que los niveles de actividad varían sustancialmente (Booth, 1975 a). Aun cuando el 14 0/o no se había comprometido en ninguna de las variables escogidas para medir la participación, el 21 0/o se había comprometido en seis o más de éstas, con una cantidad promedio, para la muestra, de 2,8. Para lograr en el estudio una profundización se enfocaron las actividades menos comunes (las ejecutadas por 30 0/o o menos de la muestra), las cuales según lo sugieren autoridades en la materia antes citados, son los que se concentran entre las actividades políticas. La mitad de los cabeza de familia costarricenses habían ejecutado al menos una de esas actividades menos comunes y alrededor de 15 0/o se había comprometido en tres o más. Ello quiere decir que existe cierto grado de concentración de la participación política en Costa Rica, tal como se ha observado en otras sociedades.

Si bien es cierto que una pequeña minoría tiene una participación desproporcionada, también la evidencia reveló otra cara de la moneda: es poco común la inactividad extrema y casi la mitad de los informantes se habían comprometido entre una y cinco de las formas menos comunes de participación.

La pregunta de cuánta concentración o traslado existe actualmente, se puede examinar más profundamente. Una primera especulación (Milbrath, 1965. Lane, 1959) sugirió que la participación es tan concentrada que prácticamente cada persona que ejecuta un acto poco común, también ejecuta actos comunes. Sin embargo, Kim, et. al. (1974) y Verba y Nie (1972), han demostrado que este supuesto se derrumba para las siete sociedades estudiadas por Verba-Nie, donde la participación está más esparcida y mucho menos concentrada que lo esperado. Aún más, sugieren que la concentración de la participación aumenta en la medida en que aumenta el nivel de desarrollo económico de la sociedad. Los datos costarricenses (Booth, 1975 a, págs. 107-114) son similares a los hallazgos de Kim, et al. Una comparación del traslado de la participación entre los comportamientos representativos de los seis modos reveló que la concentración es solamente la mitad de lo que sería su máximo teórico. Mucha más gente toma parte en los actos más difíciles, que cuestan más tiempo y que son menos comunes de lo que uno esperaría si únicamente algunos activistas dominaran todos los campos de la actividad política. Desafortunadamente, no hay análisis similares de la concentración de la participación para otras naciones latinoamericanas.

Otra manera de explorar el grado de concentración es el de examinar hasta qué punto el SSE afecta la participación. Se ha observado ampliamente (Salisbury, 1975, pág. 326. Milbrath y Goel, 1977, págs. 86-106) la correlación entre un alto status y una actividad política más intensiva. ¿Es verdad que los de un SSE alto dominan o acaparan la actividad política? Se diría que tal monopolio existe si:

1. Ninguna actividad ocurriera entre los ciudadanos más pobres;
2. o los ricos estuvieran mucho más activos políticamente que los grupos de status más bajos;
3. los grupos "no-élites" tuvieran virtualmente ninguna influencia sobre la distribución de los bienes públicos.

Los datos de toda América Latina han socavado totalmente la proposición de que los pobres son políticamente inactivos. El tamaño del grupo de los ciudadanos costarricenses totalmente inactivos (14 0/o) es ínfimo en comparación con la amplitud de los grupos de SSE bajos (Booth, 1975 a).

Aún más, las investigaciones sobre los campesinos costarricenses, de los cuales la mayoría es bastante pobre (Booth y Seligson, 1979. Seligson, en prensa), revelan niveles sustanciales de participación. Además, estudios de otros lugares de América Latina nos informan de una importante cantidad de actividad política entre el campesinado; en Méjico (Landsberger y Gierisch, en prensa), Chile (Loveman, 1976, en prensa); y Brasil (Forman, 1976) y entre los pobladores urbanos pobres en varios países (Ray, 1969. Cornelius, 1974, 1975. Dietz, 1974, 1977. Portes 1969, 1971, 1972. Moore, 1977. Peattie, 1968. Perlman, 1975, 1976. Roberts, 1973). Entonces eso quiere decir que los grupos de status más bajos toman un papel activo en la política de muchos países latinoamericanos. Este papel involucra no sólo la actividad organizacional y comunal, sino también la participación partidaria y el contacto con funcionarios públicos. Así, los sectores del status alto no dominan la participación en este sentido.

La participación política desproporcionada, por parte de los ciudadanos más adinerados, es la segunda condición anteriormente mencionada. ¿Es el activismo político de los estratos altos extraordinariamente más grande, en comparación con el de los estratos bajos? Si esta afirmación es acertada, ¿hasta qué punto y en cuáles tipos de actividad?

La respuesta a la primera pregunta es un 'sí' restringido: individuos situados en lo alto de la jerarquía de status son más activos en ciertos terrenos políticos. Por ejemplo: Fagen, y Tuohy (1972, págs. 81-106) informan que la clase social y el alto nivel educacional tienen una fuerte relación positiva como lo hemos notado anteriormente. Por otra parte, los costarricenses, en general, exhiben una correlación positiva de baja a moderada entre el SSE y cinco de los seis modos de participación política:

votación, activismo partidario, comunicación política, activismo organizacional, y contacto con funcionarios públicos (Booth, 1975 a, 1978). Entre los campesinos costarricenses, la tenencia de la tierra, un índice importante de prestigio social y económico en el campo, contribuye a un incremento significativo en la participación en organizaciones, en esfuerzos de desarrollo comunal y en el contacto con funcionarios públicos (Booth y Seligson, 1979). Cornelius (1975, pág. 94) informa sobre una correlación débil, pero significativa, del SSE con la votación y la campaña, entre sus migrantes pobres de la ciudad de Méjico.

Datos provenientes de otras naciones latinoamericanas, también revelan correlaciones positivas entre los indicadores participatorios y el status socioeconómico. Biles (1978) nos enseña una débil correlación positiva entre el SSE y la pertenencia a una organización en el Uruguay urbano. Los datos de McClintock (1976 a, 1976 b) sobre el campo peruano en 1969 y 1974, revelan de débiles a moderadas asociaciones positivas entre el SSE y los niveles de participación política en una variedad de contextos ocupacionales, a pesar de la homogeneidad de sus muestras de población.

Bourque y Warren (1979) demuestran que entre las mujeres de dos pueblos peruanos, hay una actividad política excepcionalmente alta entre aquéllas que pertenecen a un status más alto que normal, como resultado de una independencia económica de los hombres. Fishel (1976) informa que en otro distrito peruano, la élite socioeconómica desempeña un mayor papel político (sobre todo en cuanto al contacto con funcionarios públicos) que el de la mayoría de los ciudadanos. No sería arriesgada, por eso, la conclusión de que tanto en el terreno nacional como en una variedad de contextos locales, que los individuos de SSE mayor tienden a comprometerse más en la política que los de SSE menor.

Sin embargo, no toda evidencia revela tales relaciones positivas. Varios de los estudios recién citados, relatan hallazgos muy distintos para ciertos tipos de actividad. Por ejemplo, los pobres de la ciudad de Méjico, estudiados por Cornelius, están significativamente más dispuestos a participar en la resolución de problemas comuna-

les al estar en un SSE bajo (1975, pág. 94). Así mismo, entre los costarricenses, el activismo comunal ocurre más frecuentemente entre personas de SSE bajo, sin importar si se toma en cuenta la población como un todo, o si se aíslan los residentes rurales (Booth y Seligson, 1975. Seligson y Booth, 1979. Seligson, 1978).

Del mismo modo, Biles (1978) no encontró una correlación entre el SSE y la votación o comunicación política entre los uruguayos urbanos, y encontró una asociación negativa en cuanto a campaña y contacto. El estudio de Baloyra y Martz (1978) de la participación en la elección venezolana de 1973, no relata asociación alguna entre la votación y el SSE. Ellos atribuyen este fenómeno a la naturaleza obligatoria de la votación y a la movilización intensiva de la campaña electoral venezolana, Landsberger y Gierisch (1979) no detectaron grado alguno, estadísticamente significativo, de asociación entre índices de status objetivos tales como: cantidad de tierra poseída, educación e ingreso, votación y activismo partidario, en su muestra del campesinado mejicano. Y, finalmente, Dietz y Moore (1977, págs. 37-41) no detectaron ninguna correlación significativa entre SSE y esfuerzos de desarrollo comunal en los pobladores y migrantes de Lima, e informan además que los activistas son ligeramente más pobres, sistemáticamente que los residentes inactivos.

Estos hallazgos revelan patrones de participación política que tienen un interés considerable. Las personas de SSE mayor predominan, evidentemente, en la participación en el terreno del gobierno nacional. Esto es así, en primer lugar, porque las personas con mayor riqueza y prestigio probablemente tienen intereses en su defensa, la cual se puede hacer a través de la política nacional. En segundo lugar, las personas de status alto, normalmente tienen los recursos educacionales y económicos que facilitan la participación dentro de los complejos y centralizados sistemas políticos nacionales de América Latina.

Por el otro lado, personas de SSE menor, desempeñan papeles políticos más activos que las élites, en proyectos de desarrollo comunal, como ya hemos notado en la sección anterior, el alto grado de centralización de la mayor parte de los servicios pú-

blicos dentro de las zonas metropolitanas de la región, favorece los esfuerzos de desarrollo comunal por parte de los habitantes de barrios urbanos pobres o campesinos, por la carencia de tales servicios. "Cuando las políticas nacionales distribuyen desigualmente los bienes públicos y ofrecen bajas perspectivas para las mejoras locales, los vecinos confían en sí mismos, a menudo, para la creación de bienes públicos por medio de un esfuerzo comunal." (Booth y Seligson, 1975 a; véase también los estudios en Seligson y Booth, 1979).

El último tema, bajo el rubro de la dominación de la participación por parte de los de SSE más alto, se refiere al grado relativo de influencia sobre la política pública. Aunque la definición escogida de participación política rechaza explícitamente la noción de que se requiere tener influencia sobre las políticas para que ocurra la participación, una significación sustantiva del tema global depende en grado importante, del impacto sobre las políticas públicas. Vale decir, que en el caso de que las no-élites tomaran parte en la política, pero no tuvieran influencia sobre las políticas, la participación carecería de pertinencia y no valdría más un pequeño comentario. ¿Cuánta influencia ejercen sobre las políticas los grupos de sectores medios y bajos en América Latina? Hay evidencia de que ciertos sectores del público de masas influyen, a veces, en las políticas públicas nacionales, tanto en los contextos autoritarios, como en los democráticos. Pero, puesto que las políticas específicas afectan raramente a todos los estratos sociales de manera simultánea, tenemos que aislar los grupos específicos para examinar tal influencia. Un sector a considerar es el de los pobres de la ciudad. La literatura, actualmente casi brobdingnagiana, sobre los migrantes urbanos y los pobladores niega la posibilidad de un tratamiento exhaustivo, debido al enfoque más amplio de esta reseña.

Las citas que siguen son ilustrativas; para mayor análisis y citas, el lector debe consultar los trabajos de Cornelius (1973, 1974, 1975) sobre la ciudad de Méjico, que también se refieren a mucho del material transnacional pertinente, así como la reseña de las investigaciones de Handelman (1975 a) sobre la pobreza urbana en Santiago de Chile, y la bibliografía de Portes y Walton (1976).

El estudio de casos hecho por Peattie sobre el barrio pobre "La Laja" de Caracas, describe el desarrollo de un proceso creador de demanda que eventualmente logró asegurarse cañería, un campo de béisbol y un centro de nutrición. Si bien observa que los intentos de influir, por parte de tales comunidades pueden con frecuencia fracasar, debido a la carencia de recursos del gobierno o a actitudes recalcitrantes de las autoridades, Peattie señala que el éxito en estos casos fue el resultado de una movilización de "un grupo de presión suficiente para establecer nuevos canales de contacto con los centros de poder fuera de la comunidad" (1968, pág. 69). Así mismo, Cornelius informa que las demandas "convencionales" (sin protesta) habían resultado parcialmente exitosas en las seis comunidades de bajo ingreso de la ciudad de Méjico: "La mayoría de los beneficios citados por los líderes comunales no se habrían otorgado sin el planteamiento abierto de las demandas". (1974, pág. 1.140). El atribuye el fracaso del gobierno en solucionar otras necesidades, algunas veces, a planteamientos discontinuos o ineptos de las demandas y, otras veces, a la falta de respuesta oficial.

Abundan los estudios que dan fe de impactos similares sobre las políticas públicas (por ejemplo, véase Ray, 1969. Fagen y Tuohy, 1972. Roberts, 1973. Dietz, 1974. Leeds y Leeds, 1976. Portes y Walton, 1976. Moore, 1977), pero no se puede inferir de allí que el impacto sobre las políticas por parte de los pobres de la ciudad es extensivo, ni que los pobres logran obligar con frecuencia a los gobiernos a una reorganización de sus prioridades presupuestarias. Moore (de próxima aparición) afirma que: "la capacidad de... extraer beneficios de poca monta (pero reales) del sistema, mediante su manipulación, no altera el hecho de que este tipo de participación deja intactas las condiciones estructurales de desigualdad sistemática". La naturaleza básicamente cooptativa de las concesiones a los precaristas urbanos y a los migrantes, ha sido demostrada, entre otros, por Eckstein (1977) en el caso de Méjico; Perlam (1976) en el caso de Brasil; y Collier (1975) en el caso del Perú.

Los gobiernos suelen hacer concesiones, no a gran escala como para beneficiar grandes sectores de los pobres de la ciudad, sino en forma "distributiva", tales como

darles lotes y títulos a precaristas, disgregando así los beneficios al concederlos sobre una base individual (Collier, 1975, págs. 46-47). Así, más que seguir costosas políticas redistributivas, tales como proyectos gubernamentales de vivienda, el Estado adquiere tierra relativamente barata y la distribuye parcelada, elevando al máximo su control y reduciendo al mínimo la probabilidad de retos serios a la asignación global de los recursos públicos.

Los pobres de las zonas rurales también pueden influenciar hasta cierto punto la política del gobierno nacional. Aún pequeñas comunidades rurales aisladas, en varios países obtienen favores políticos de sus gobiernos nacionales. El estudio de Doughty y Negrón (1964, págs. 56-59) sobre la aldea "Perarín", de los Andes peruanos, informa que en varias ocasiones el gobierno ha reaccionado con asistencia a pedidos de la comunidad. Como respuestas a las delegaciones de Lima, el gobierno ha ayudado a asfaltar algunas calles, provisto materiales para una de las escuelas, aportado ayuda técnica para la instalación de un generador y suplido ayuda a causa de un terremoto. Así mismo, el gobierno de Costa Rica había dado asistencia de algún tipo a dos terceras partes de los proyectos de mejoramiento comunal censados en ciento nueve pueblos y aldeas. Esta ayuda fue de varios tipos: partidas específicas dadas por la Asamblea Legislativa, donación de material y maquinaria por el Ministerio de Obras Públicas, asistencia técnica del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados, asignación de maestros y libros para escuelas construidas por la comunidad, etc. (Booth, et al., 1973). Otros ejemplos de tales respuestas gubernamentales a demandas campesinas pueden hallarse en Dobyens (1964); Whyte (1969); Castillo (1964); González y Hammock (1973); y Fishel (1979).

Un fenómeno que facilita con toda claridad la influencia política de los campesinos, es la organización. Las ligas campesinas de Bolivia (McEwen, 1975. Malloy, 1970) han demostrado ser eficaces en lograr asistencia para las comunidades rurales, resultando que las comunidades organizadas reciben mucha mayor asistencia gubernamental. El estudio hecho por Powell (1971) sobre el movimiento campesino en Venezuela revela cómo los líderes sindicales campesinos funcionan como socios del

gobierno en la búsqueda de una reforma agraria y desarrollo de servicios. El concluye que la política agraria del gobierno está "abierta a la contribución de la federación campesina" aunque las consideraciones de la planificación racional han modificado la acción estatal con frecuencia (pág. 171).

A pesar de tal evidencia, no se debiera suponer que ha sido muy grande el grado de respuesta de los estados latinoamericanos a las demandas de los pobres del campo. Al igual que ocurre con los pobres de las zonas urbanas, la cooptación y el uso de políticas altamente distributivas, minimizan el costo de concesiones a los campesinos. Aún en Méjico, donde los campesinos han declarado violentamente sus demandas reformistas, los gobiernos revolucionarios han seguido favoreciendo las estrategias del desarrollo urbano-industrial. La redistribución de la tierra ha sido de un relativo bajo costo (sobre todo puesto que ha minado fracciones de la hostil oligarquía antigua), y ha seguido un patrón desagregado o distributivo, algo análogo a lo descrito por Collier (1975) respecto a los precaristas urbanos peruanos. Se ha tomado la tierra pagándole al valor territorial declarado y se ha parcelado en ejidos en una manera irregular, conforme con el descontento campesino. El gobierno y el liderazgo del PRI han cooptado líderes campesinos para manipular su defensa de intereses campesinos (Hansen, 1971, págs. 87-107). Aunque los campesinos costarricenses han evitado básicamente la violencia hasta la fecha, se ha satisfecho la demanda de la tierra en una manera igualmente desagregada. Primero, por medio de la colonización individual de tierra pública y cuando se agotó la tierra pública, el gobierno empezó a recompensar terratenientes particulares por pérdidas causadas por precaristas. (Seligson, 1977. Booth y Seligson, 1979). Volviendo a los grupos del sector medio Malloy (1977). Rosenberg y Malloy (1978); y Mesa-Lago (1979), presentan una perspectiva general para la región entera, en cuanto al éxito de los grupos de presión (sobre todo de los elementos de los sectores medios) en la conquista de concesiones y de un tratamiento especial en el desarrollo de sistemas de seguridad social. Grupos de presión específicos han tenido de hecho tanto éxito, que los esfuerzos para una reforma de los seguros sociales han fracasado, salvo en algunos regímenes militares, donde con la fuerza co-

ercitiva suficiente se reprimieron las protestas de los grupos de presión en contra de la pérdida de un privilegio especial.

Después de algunos años del golpe militar peruano de 1968, las organizaciones de SINAMOS, estructuradas y manipuladas por el gobierno, lograron desempeñar un papel independiente como representantes de intereses (a veces representando a los partidos proscritos). Este fenómeno llevó al gobierno militar reformista a una nueva evaluación de su compromiso con la participación de las masas, en defensa de sus propias decisiones políticas (Woy, 1978. Dietz y Palmer, 1978).

La evidencia indica que, en general, varios sectores sociales sí influyen sobre las políticas públicas, aunque las élites traten de manipular la actividad política de otros grupos para su propio beneficio. (Adams, en prensa. Baylis, 1978). Así, pues, en la mayor parte de América Latina, las concesiones políticas a los pobres tienden a ser manipuladas y cooptativas. Las respuestas gubernamentales a las presiones de los sectores medios y altos son más amplias, demostrando este hecho una influencia mayor de estos grupos que la de los pobres. En resumen, la concentración de la participación política en América Latina no parece más destacada que en otras regiones culturales. Sin embargo, aunque las no-élites se comprometen en cantidades significativas de actividad en una variedad de contextos, su influencia, sobre las políticas, aunque innegable, es débil dentro del contexto de las instituciones gubernamentales nacionales.

La racionalidad de los participantes

El último planteamiento de la investigación explora la racionalidad del público masivo en América Latina. Un test de racionalidad ciudadana debe evaluar, en principio, si la conducta política masiva muestra características de orientación hacia metas. Un modelo, susceptible de pruebas, que se construye con base en la premisa de que, para comportarse racionalmente, habría que estar suficientemente orientado hacia el futuro para tener metas, debe percibir alguna institución política como parti-

nente para la realización de esas metas, y luego debería actuar coherentemente con esas metas y percepciones. (Lane 1959, págs. 103-362. Czudnowshi, 1968. Touraine y Pécaut, 1970. Portes, 1972, págs. 271-272. Almond y Verba, 1965, pág. 219). Entonces, el comportamiento político-racional consistiría en un patrón de actividad en las instituciones políticas en proporción con la intensidad de las metas pertinentes y con la percepción de esas instituciones como útiles para la realización de estas metas. La participación irracional sería, o bien causal, en ausencia de metas y pertinencia institucional, o bien poca en presencia de una fuerte orientación hacia las metas y una gran pertinencia.

Un estudio (Booth, 1977, 1978) basado sobre una muestra nacional de probabilidad en Costa Rica, sometió a prueba el modelo de orientación hacia meta-pertinencia, dentro de tres contextos políticos. El comportamiento se conformó al modelo de medios-fines de racionalidad política en cada caso. La participación, dentro del contexto comunal, del gobierno local y nacional, ocurrió menos entre quienes tenían metas débiles y no tenían una clara percepción de la institución como pertinente, ocurrió más entre quienes tenían fuertes metas y ninguna percepción de pertinencia o viceversa y ocurrió con la mayor frecuencia entre quienes poseían metas más fuertes y una percepción de pertinencia.

Evidencias de otras naciones latinoamericanas también arrojan luz sobre el tema de la racionalidad ciudadana. Chaffee (1975, 1976, 1977, en prensa) teoriza que tanto la participación como la no participación en la política, resultan de un cálculo individual de los costos y beneficios relativos de la acción. Sostiene que el individuo racional haría un esfuerzo para influenciar sobre la distribución de bienes públicos, solamente cuando los beneficios potenciales tuvieran más peso que sus pérdidas potenciales. Chaffee cita varios ejemplos de acción política convencional y no-convencional para apoyar esta hipótesis. El análisis de Neuse (1978), de los patrones de votación de las mujeres chilenas desde 1952 hasta 1973, reporta una acción racional. Para Neuse, el aumento en la participación femenina de la clase baja después de 1970, respondía a los esfuerzos consecuentes de movilización por parte de la coalición Uni-

dad Popular. Este cambio refleja, aparentemente, la decisión de las mujeres de perseguir sus metas personales a través de instituciones políticas, porque los partidos las habían persuadido de que ellas podían aprovecharse de la política más que en tiempos pasados.

Otros estudios de situaciones autoritarias, apoyan la racionalidad aparente de los patrones de actividad política de las masas. Dietz (1974, 1977); Cornelius (1974); y Dietz y Cornelius (1976) han examinado el proceso de formulación de demandas entre los migrantes urbanos y los precaristas de Lima y de la ciudad de Méjico, haciendo uso de un modelo similar al que he empleado (véase Booth y Seligson, 1978 a, pág. 15, para una discusión del modelo Cornelius-Dietz). Sus hallazgos detallan las tácticas complejas con las cuales los pobres de la ciudad buscan ayuda gubernamental para el suministro de servicios necesarios. Estos patrones de comportamiento racional se parecen, significativamente a los observados por Mathiason (1972) entre los pobres de las zonas urbanas de la Venezuela democrática.

Finalmente, el examen de Portes de numerosos estudios sobre el comportamiento político de los habitantes de barrios pobres en varias ciudades (incluyendo Santiago, la ciudad de Guatemala, Lima, Bogotá y Barranquilla) lo condujeron a concluir que tal participación es racional. (Véase también Portes, 1976).

En resumen, las evidencias, provenientes de varios países latinoamericanos, revelan patrones racionales de comportamiento político en muchos tipos de actividad política. Aunque estos hallazgos no niegan las posiciones de la literatura sobre cultura política de que los latinoamericanos pueden ser emocionales, dogmáticos, personalistas o paternalistas en su comportamiento político ⁷, sí arrojan alguna duda sobre la conclusión común de que la participación política es, por lo tanto, necesariamente irracional. Una interpretación más razonable reconocería cómo la complejidad de la motivación humana, la cultura, y el ambiente social y físico del individuo, tiene que afectar la toma de decisiones (Seligson y Booth, 1976). Se necesita más investigación para iluminar y explicar los efectos de tales factores sobre el comportamiento orien-

tado hacia metas y el proceso de toma de decisiones. Estudios futuros deberían tratar acerca de las pruebas empíricas de estos modelos, tomando en cuenta la multiplicidad de influencias en el ambiente social.

Discusión

Para resumir, la evidencia disponible nos da, en un modo general, el siguiente cuadro: hay una actividad política no violenta, bastante extendida entre la ciudadanía. Dado el nivel general de desarrollo socioeconómico de América Latina, la participación no parece ni excepcionalmente infrecuente ni muy extensa, aunque hay variaciones de tipo y de grado, tanto dentro como entre las sociedades.

Hay varias y distintas maneras de participación política no-violenta, muy parecidas a las observadas en otras regiones culturales, incluyendo votación, activismo partidario, contacto con funcionarios públicos, discusión política, actividad organizacional, y trabajo de desarrollo comunal. Las variaciones en el ambiente socioeconómico y político parecen explicar las grandes diferencias entre los estilos de participación: los sectores marginales, tales como los pobres de las zonas urbanas y rurales, se empeñan con más frecuencia en la resolución colectiva de problemas en el terreno comunal, mientras que los sectores medios y altos de zona urbana, integrados y beneficiados por el sistema político nacional, toman una parte más activa en el terreno nacional. Las élites manipulan la participación de masas para servir a fines elitistas. Sin embargo, a pesar del hecho que ocurre alguna concentración de participación política en las manos de élites socioeconómicas y de activistas políticos, y aunque las élites ejercen una influencia desproporcionada sobre las políticas, una proporción grande de ciudadanos latinoamericanos toma parte activamente en la política. Y, finalmente, el público masivo latinoamericano participa en patrones que sugieren una racionalidad de tipo medios/fines, persiguiendo sus metas políticas de acuerdo con sus percepciones de la utilidad de ciertas instituciones políticas para la realización de tales metas.

Una reevaluación de la modernidad y de la movilización política

Un punto central de la teoría de la modernización ha sido la movilización política, descrita, ya hace mucho tiempo, como la transición de los bajos niveles de participación hacia los altos niveles (Portes, 1973, 1974). La primera de diez dimensiones de modernidad que Portes ha hallado, tanto en la teoría como en la investigación es: "la participación: la motivación y la capacidad de tomar parte en organizaciones y procesos electorales en defensa de propios intereses y/o de creencias generales" (1974, pág. 249). Al nivel sistémico, esta tendencia participativa significa la movilización concebida normalmente como un cambio de una inactividad política difundida hacia un creciente activismo ciudadano. Algunos de los hallazgos de la nueva literatura sobre la participación en América Latina sugieren, sin embargo, que se podría, provechosamente, modificar ligeramente el concepto de movilización política. Muchos de los ya citados estudios describen una participación sustancial dentro de las comunidades, además de la interacción con instituciones nacionales, aun entre poblaciones altamente tradicionales. Entonces, la movilización puede involucrar cualquiera de estos dos cambios o ambos:

1. La participación puede cambiar de la actividad colectiva de autoayuda y de la organización dentro del terreno comunal, hacia una actividad de un estilo más electoralista y consumista en el terreno político nacional, en la medida que las instituciones políticas adquieren la capacidad de suministrar bienes útiles; o
2. se puede desarrollar tal activismo nacional además de la participación comunal. Por lo tanto, la participación selecciona los terrenos de acción según la capacidad institucional de suministrar o distribuir bienes públicos.

El terreno comunal conserva una importancia primaria para los ciudadanos marginados de las instituciones nacionales. En la medida que el gobierno desarrolla su capacidad para suministrar bienes públicos necesarios, la actividad comunal es suplantada o complementada por la actividad en el terreno nacional. Sin embargo, aún des-

pués de que las instituciones nacionales se vuelven importantes, el activismo puede mantener vigencia o reaparecer.

Las investigaciones citadas, han descrito el impacto del contexto sociopolítico sobre el estilo participatorio. Cuantiosos estudios (Portes, 1971. Dietz, 1974. Seligson, 1978. Booth, et al., 1973. Booth, 1975 b. Cornelius, 1973), vinculan niveles de activismo a los niveles de servicios, destacando que aún los grupos urbanos altamente modernos se comprometen en autoayuda colectiva cuando se enfrentan a una escasez de servicios que las instituciones del gobierno no pueden o no quieren resolver. De esta manera, el estilo participativo está determinado no tanto por el tradicionalismo individual o por la modernidad sino más bien por el contexto en el cual vive el ciudadano.

Tales hallazgos tienen alguna importancia potencial para nuestra comprensión de las teorías de la modernización política. (Deutsch, 1961. Lenner, 1958. Huntington, 1968. Almond y Verba, 1965). Como ya hemos notado, la literatura sobre modernización política enfatiza una transformación de no participación a participación, conforme con la modernización individual subjetiva (Portes 1973, 1974). Pero estos estudios ponen en relieve los fenómenos estructurales —determinantes contextuales de la participación— en vez de las diferencias individuales, en la capacidad o en la inclinación a participar por parte de personas ‘tradicionales’ o ‘modernas’. Esto sugiere a su vez, que lo que se ha tomado por transformación subjetiva del individuo —el desarrollo aparente de actitudes ‘modernas’ de participación extendida— puede ser, más bien, un proceso por medio del cual un individuo sencillamente reacciona a cambios estructurales en el ambiente. Así, la modernización no necesariamente significa la adquisición de una nueva predisposición a la participación, sino significaría simplemente percibir que en el terreno político nacional posee una utilidad potencial. Parecería útil una nueva evaluación de las implicaciones del proceso de modernización política. Por ejemplo, puede ser exacta la posición de Verba y Almond acerca de que el ciudadano ‘provincial’ (parochial) no espera nada del sistema político (1965, pág. 17), pero su afirmación de que los provincianos no son participantes, no concuerda

con la evidencia de que aun las comunidades rurales más tradicionales y aisladas a menudo hierven de actividad política. La no participación "provincial" en la política nacional es probablemente consecuencia de una ubicación en el sistema social, y no de un atributo sicocultural de ciertos individuos.

Las discrepancias posibles entre las teorías de la movilización y de la modernización y los datos disponibles, exigen mucho más información, tanto sobre los cambios históricos de participación a largo plazo dentro del proceso de modernización, como de los determinantes contemporáneos del estilo participativo. Así se destacan dos necesidades mayores de investigación: la primera exige la investigación histórica de los varios modos de participación desde la época colonial de América Latina hasta el presente, para suministrar un cuadro de actividad pasada con el fin de compararlo con la actual. La segunda necesidad es la de un análisis comparativo entre distintos estratos sociales, para medir la importancia relativa y los determinantes de los modos comunitarios versus los modos del sistema nacional, con el fin de determinar, con más precisión, por qué ocurren tales diferencias en estos comportamientos.

Una reevaluación de la cultura política latinoamericana

Los niveles sustanciales de participación pacífica y racional en América Latina señalan los graves defectos de la imagen tradicional de irracionalidad en la participación política de masas. Para rectificarlos habría que hacer dos esfuerzos mayores: El primero es un nuevo análisis cuidadoso de mucha de la literatura sobre la cultura política latinoamericana. Habría que reconsiderar el supuesto, demasiado común de que tales atributos como emocionalismo, paternalismo, localismo, y machismo, indican necesariamente la irracionalidad política o impiden el comportamiento racional, dada la existencia evidenciada de patrones de comportamiento de masas racionales. "Ciertas clases de comportamiento político como las relaciones patrón-cliente o la retracción de una asociación política abierta, en vez de ser indicadores de subdesarrollo. . . son, de hecho, estratégicas respuestas políticas racionales a las condiciones estructurales ajenas a nuestros actores en la vida política en general". (Leeds y Leeds-

1976, pág. 201). Una segunda necesidad se relaciona con una investigación acerca del tema de la racionalidad política en contextos complejos. La racionalidad del comportamiento individual no debe ser medida contra una noción abstracta y frágil, sino contra modelos sofisticados sensibles a la importancia del ambiente social complejo.

El contexto y la estructura de participación

Tenemos que considerar también las maneras en que las formas y prácticas constitucionales afectan los modos de participación de las masas. Hemos visto que aunque un régimen autoritario restringe o modifica la participación, lo hace en una manera selectiva afectando modos distintos en maneras distintas, por ejemplo donde las elecciones se hallan prohibidas o los partidos proscritos, los modos de actividad electoral están, obviamente, reducidos, pero sin que esto necesariamente interfiera con otras formas de participación.

Así, en Perú, el gobierno militar suprime partidos y elecciones, pero la organización política, la comunicación, el contacto con funcionarios públicos, y la actividad de desarrollo comunal, se producen constantemente, a menudo alentadas por el mismo régimen (Dietz, 1974. Bourque y Palmer, 1975. Collier, 1975. Dietz y Palmer, 1978. Woy, 1978). Para otro ejemplo, en una sociedad revolucionaria, tal como Cuba, la naturaleza de facto del sistema político puede modificar la participación de manera tal que se mezclen la actividad partidaria y comunal y así emerge un modo de autogestión local; se ha observado tal patrón en Yugoslavia (Verba, et al., 1973). Informes recientes de Cuba (Leogrande, 1978. Domínguez, 1976. González, 1974. Fagen, 1972. Zeitlin, 1970) insinúan tales tipos de desarrollo con la creación de consejos de obreros y comités para la defensa de la revolución. Para aclarar cómo influyen las características del régimen en la acción ciudadana, se necesita más sistematización de los datos disponibles acerca de los efectos contextuales sobre participación y más investigaciones comparativas.

Participación política y desarrollo político

Una última área en la que estos hallazgos implican alguna revisión concierne a las teorías del desarrollo político, tal vez mejor ejemplificada en la obra de Samuel Huntington (1968) y su colaboración con Joan Nelson (1976). A pesar del reconocimiento por parte de Huntington y Nelson, de la multidimensionalidad de la participación política (1975, págs. 12-15) su análisis trata la participación en una manera unidimensional, como si las implicaciones de todas las variedades de acción fueran parecidas. Como tal, su discusión de modelos de desarrollo político asume, implícitamente, que toda participación pertenece esencialmente a una de dos clases; o es redistributiva, conduciendo a los gobiernos a "redistribuir los ingresos y la riqueza" (1976, pág. 75) o es defensiva, para proteger las distribuciones existentes.

Sin embargo, la evidencia aquí presentada, indica claramente que los esfuerzos para influir sobre la distribución de bienes públicos, no siempre, asumen formas redistributivas o defensivas. Un ejemplo, podría ayudarnos. La actividad de mejoramiento comunal consiste esencialmente, en la expansión o la creación de bienes públicos, en vez de la reasignación o de la defensa de una cantidad fija de bienes públicos existentes. Como tal, los esfuerzos de las comunidades para incrementar su propio acervo de bienes públicos por medio de gastos públicos, se agrega al desarrollo económico o a la infraestructura capital de la sociedad, de una manera ni defensiva ni redistributiva. Gran parte de tal actividad se realiza independientemente del gobierno, pero muchos gobiernos latinoamericanos han reconocido la utilidad de tal participación e intentan estimularla.

Estas observaciones implican, entonces, que el tratamiento teórico del desarrollo de la participación política, es incompleto. Aunque los teóricos tienen razón esencialmente acerca de los efectos de las formas verdaderamente redistributivas y defensivas de la participación política, su análisis no trata adecuadamente la verdadera variedad de acción política ciudadana y sus múltiples implicaciones. Para que se complete mejor tal teoría, tendría que explicar más cabalmente la variedad de terrenos

dentro de los cuales se distribuyen los bienes públicos y las diferencias en la naturaleza y consecuencias de distintos modos de acción política⁸.

Conclusión

A lo largo de este ensayo, la evidencia presentada y la discusión sobre la acción ciudadana en América Latina han enfatizado dos temas básicos. Primero, para una comprensión adecuada de la participación y los temas íntimamente relacionados con ella tales como la cultura política, el desarrollo político, la movilización y la modernización, hay que prestar atención a la gran variedad de participación política. El análisis no debe meramente reconocer esta diversidad para después no tomarla en cuenta, por medio de la reagregación estadística o conceptual de modos distintos para más adelante teorizar e investigar como se ha hecho comúnmente (por ejemplo, Milbrath, 1965. Huntington, 1968. Verba y Nie, 1972. Huntington y Nelson, 1976. Milbrath y Goel, 1977). Segundo, el ambiente sociopolítico tiene un mayor impacto sobre la participación política, afectando la forma el nivel, y significado de actos particulares.

Variabes contextuales tan diversas como la infraestructura de desarrollo, el tipo de régimen, la constitución política y la comunidad, proveen el cuadro dentro del cual los ciudadanos tejen su compleja tela de participación. Un mayor progreso en la comprensión de la actividad política y su significado para las naciones latinoamericanas en última instancia dependería del grado de sensibilidad que mantenga la investigación futura hacia la variedad de participación y complejidad de sus contextos.

NOTAS

1. Booth y Seligson (1978 b), discuten ampliamente cada una de las imágenes tradicionales, presentando fuentes y citas ilustrativas.
2. Véase Seligson y Booth (1976, en prensa-b); y Booth y Seligson (1978 b) para otros temas sobre la participación política en América Latina.
3. Para una discusión más amplia sobre la definición empleada aquí de la participación política, consúltese Booth y Seligson (1978 c). Véase también Chaffee (1976, en prensa).
4. Por ejemplo para elecciones, véase: Lott (1957). Taylor (1960). Borricaud (1964). Gil and Parish (1965). Martz (1967). Soares (1967). Parrish, et. al. (1967). Schmitt (1969). López Pintor (1969). McDonald (1971, 1972 a, 1972 b). Sinding (1972). Harkness and Pinzón de Lewin (1975). Isuani and Cervini (1975). Prothro and Chaparro (1975); y Valenzuela (1977). Para partidos políticos véase: Taylor (1954). Fitzgibbon (1957). Alexander (1964, 1969). Martz (1964, 1972). Tugwell (1965). Horowitz (1965). Williams (1967). Ranis (1968). Burnett (1970). Petras (1970). Davies (1971). Mabry (1973). Ciria (1974). Chalmers (1974-1975). North (1975). y Wellhofer (1975).
5. Como se ha señalado en otro lugar (Booth y Seligson, 1978. Biles, 1978), la discusión política puede o no (dependiendo del intento del actor y las consecuencias de la acción) reunir los criterios de intentar influir en la distribución de bienes públicos, que es el meollo de la definición de participación política. Sin embargo, puesto que es posible que la participación política sea verdaderamente participatoria, se la incluiría en la discusión subsiguiente sujeta a esta amonestación.
6. Aquí se emplea el término 'régimen' en un sentido amplio, con connotaciones de muchos factores, incluyendo el ordenamiento constitucional, las características del liderazgo, los sistemas partidarios, los sistemas de vinculaciones élite-masas, etc.
7. Para leer las citas y otros asuntos avanzados como evidencia de la irracionalidad por estudiosos de la cultura política latinoamericana, véase Booth (1978, pág. 99); y Booth y Seligson (1978 a, pág. 13).
8. Seligson y Booth (en prensa a) discuten con más detalles el tema de desarrollo político y la participación política.

BIBLIOGRAFIA

ADAMS, RICHARD NEWBOLD. 1959. *A Community in the Andes: Problems and Progress in Muquiayuyo*. Seattle. University of Washington Press. 1970. *Crucifixion by Power*. Austin. University of Texas Press. *The Structure of Participation: A Commentary*. In Mitchell A. Seligson and John A. Booth, eds., *Political Participation in Latin America*, Volume II: Politics and the Poor. New York. Holmes and Meier Publishers, forthcoming.

ALEXANDER, Robert J. 1964. *The Emergence of Modern Political Parties in Latin America*. In J. Maier and R. W. Weatherhead eds. *Politics of Change in Latin America*. New York. Praeger. 1969. The Communist Party of Venezuela. Stanford. Hoover Institution Press.

ALMOND, GABRIEL A. and SIDNEY VERBA. 1965. *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Boston. Little, Brown.

BALOYRA, ENRIQUE A. and JOHN D. MARTZ. 1978. *Dimensions of Campaign Participation: Venezuela, 1973*. In John A. Booth and Mitchell A. Seligson, eds., *Political Participation in Latin America, Volume I: Citizen and State*. New York. Holmes and Meier.

BAYLIS, THOMAS A. 1978. *The Faces of Participation: A Comparative Perspective*. In John A. Booth and Mitchell A. Seligson, eds., *Political Participation in Latin America, Volume I: Citizen and State*. New York. Holmes and Meier.

BERELSON, BERNARD R., PAUL F. LAZARFELD, and WILLIAM N. MCPHEE. 1954. *Voting: A Study of Opinion Formation in a Presidential Campaign*. Chicago. University of Chicago Press.

BILES, ROBERT E. 1978. *Political Participation in Urban Uruguay: Mixing Public and Private Ends*. In John A. Booth and Mitchell A. Seligson, *Political Participation in Latin America, Volume I: Citizen and State*. New York. Holmes and Meier.

BOOTH, JOHN A. 1974. Características sociográficas de las regiones periféricas de Costa Rica. San José, Costa Rica. Instituto de Fomento y Asesoría Municipal. 1975a. Democracy and Citizen Action in Costa Rica: The Modes and Correlates of Popular Participation in Politics. Ph. D. dissertation, The University of Texas at Austin. 1975b. *Organizational Processes in the Growing Community: Strategies for Development*. Journal of the Community Development Society 6 (Spring): 13-26. 1976. *A Replication: Modes of Participation in Costa Rica*. Western Political Quarterly 29 (Dec.): 627-33. 1977. Reason, Political Activism and Democracy: A Test of Participant Rationality in Costa Rica. Paper presented at the Southwestern Political Science Association meeting, Dallas, Texas (Apr.). 1978. *Are Latin Americans Politically Rational? Citizen Participation and Democracy in Costa Rica*. In John A. Booth and Mitchell A. Seligson, eds., *Political Participation in Latin America, Volume I: Citizen and State*. New York. Holmes and Meier. *Comparing Political Violence in Colombia and Guatemala*. In Mitchell A. Seligson and John A. Booth, eds., *Political Participation in Latin America, Volume II: Politics and the Poor*. New York. Holmes and Meier, forthcoming.

BOOTH, JOHN A., MIGUEL MONDOL VELASQUEZ y ALVARO HERNANDEZ CARVAJAL. 1973. Tipología de comunidades, Tomo II: Estudio para una tipología de comunidades. San José, Costa Rica. Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad-Acción Internacional Técnica.

BOOTH, JOHN A. and MITCHELL A. SELIGSON. 1975. Dimensions of Political Participation among Latin American Peasants. Paper presented at the Southwestern Political Science Association meeting, San Antonio, Texas. (27-29 Mar.). 1978a. *Images of Political Participation in Latin America*. In John A. Booth and Mitchell A. Seligson, eds., *Political Participation in Latin America, Volume I: Citizen and State*. New York. Holmes and Meier. 1979. *Peasants as Activists: A Reevaluation of Political Participation in the Countryside*. Comparative Political Studies. 12 (Apr.): 29-59.

BOOTH, JOHN A. and MITCHELL A. SELIGSON. eds. 1978b. *Political Participation in Latin America, Volume I: Citizen and State*. New York. Holmes and Meier.

BORRICAUD, FRANÇOIS. 1964. *Lima en la vida política peruana*. América Latina 7 (oct.-dic.): 89-96.

BOURQUE, SUSAN C. and DAVID SCOTT PALMER. 1975. *Transforming the Rural Sector: Government Policy and Peasant Response*. In Abraham F. Lowenthal, ed. *The Peruvian Experiment: Change under Military Rule*. Princeton, N.J., Princeton University Press.

BOURQUE, SUSAN C. and KAY B. WARREN. *Female Participation, Perception and Power: An Examination of Two Andean Communities*. In Mitchell A. Seligson and John A. Booth, eds., *Political Participation in Latin America*. Volume II: Politics and the Poor. New York. Holmes and Meier, forthcoming.

BURNETT, BEN G. 1970. *Political Groups in Chile: The Dialogue between Order and Change*. Austin: The University of Texas Press.

BWY, DOUGLAS P. 1968. *Political Instability in Latin America: The Cross-Cultural Test of a Causal Model*. LARR 3, no. 2 (Spring): 17-89.

CAMPBELL, ANGUS PHILIP E. CONVERSE, WARREN E. MILLER and DONALD S. STOKES. 1964. *The American Voter: An Abridgement*. New York. Wiley.

CASTILLO, HERNAN. 1964. *Chaquicocha: Community in Progress*. Ithaca, N.Y.: Department of Anthropology, Cornell University (Socioeconomic Development of Andean Communities, Report No. 5).

CHAFFEE, WILBER A., JR. 1975. *A Theoretical Look at Revolutions with Case Studies from Latin America*. Ph. D. dissertation, The University of Texas at Austin. 1976. *Entrepreneurs and Economic Behavior: A New Approach to the Study of Latin American Politics*. LARR 11, no. 3 (Fall): 55-68. 1977. *A Rational Choice Model of Mass Participation in Politics*. Paper presented to the Southwestern Political Science Association meeting, Dallas, Texas (Apr.). *Let Jorge Do It: A Rational Choice Model of Political Participation*. In Mitchell A. Seligson and John A. Booth, eds., *Political Participation in Latin America*, Volume II: Politics and the Poor. New York. Holmes and Meier, forthcoming.

CHALMERS, DOUGLAS A. 1974-1975. *Partidos políticos y sociedad en América Latina*. Estudios Andinos 10, no. 1, págs. 39-83.

CIRIA, ALBERTO. 1974. *Parties and Power in Modern Argentina (1930-1946)*. Albany. State University of New York Press.

COLLIER, DAVID. 1975. *Squatters and Oligarchs: Authoritarian Rule and Policy Change in Peru*. Baltimore. Johns Hopkins University Press.

CORNELIUS, WAYNE A. 1973. *Political Learning and the Migrant Poor. The Impact of Residential Context*. Beverly Hills, Calif., Sage Publications. 1974. *Urbanization and Political Demand Making: Political Participation among the Migrant Poor in Latin American Cities*. American Political Science Review 68 (Sept.): 1.125-46. 1975. *Politics and the Migrant Poor in Mexico City*. Stanford. Stanford University Press.

CORNELIUS, WAYNE and HENRY A. DIETZ. 1976. *Urbanización, formulación de demandas y sobrecarga del sistema político*. Revista Latinoamericana de Estudios Urbano Regionales (EURE) 5 (June): 9-46.

CZUDNOWSKI, MOSHE M. 1968. *A Salience Dimension of Politics for the Study of Political Culture*. American Political Science Review 62 (Sept.): 878-88. 1976. *Comparing Political Behavior*. Beverly Hills, Calif. Sage Publications.

DAVIES, THOMAS M., JR. 1971. *The Indigenismo of the Peruvian Aprista Party: A Reinterpretation*. Hispanic American Historical Review 51 (Nov.): 626-45.

DEUTSCH, KARL W. 1961. *Social Mobilization and Political Development*. American Political Science Review 55 (Sept.): 493-515.

DIETZ, HENRY A. 1974. *Becoming a Poblador: Political Adjustment to the Urban Environment in Lima, Peru*. Ph D. dissertation, Stanford University. 1977. *Some Modes of Participation in an Authoritarian Regime: The Case of Lima, Peru*. Journal of Political and Military Sociology 5 (Spring): 63-77.

DIETZ, HENRY A. and RICHARD J. MOORE. 1977. Some Modes of Participation in a Non-Electoral Setting. The Poblador in Lima, Peru. Paper Presented to the Conference on the Political Economy of Sun Belt Cities, Austin, Texas (Jan.).

DIETZ, HENRY A. and DAVID SCOTT PALMER. 1978. *Citizen Participation under Innovative Military Corporatism in Peru*. In John A. Booth and Mitchell A. Seligson, eds., *Political Participation in Latin America*, Volume I: Citizen and State. New York. Holmes and Meier.

DOBYNS, HENRY F. 1964. *The Social Matrix of Peruvian Indigenous Communities*. Ithaca, New York. Cornell Peru Project Monograph, Department of Anthropology, Cornell University.

DOMINGUEZ, JORGE I. 1976. *Cuba's Maturing Revolution*. *Problems of Communism* (Jan.-Feb.): 68-73.

DOUGHTY, PAUL L. 1968. *Huaylas: An Andean District in Search of Progress*. Ithaca, New York. Cornell University Press.

DOUGHTY, PAUL L. and LUIS NEGRON. 1964. *Pararín: A Break with the Past*. Ithaca: Socio-Economic Development of Andean Communities, Report No. 6, Cornell Peru Project, Department of Anthropology, Cornell University.

DOWNES, ANTHONY. 1957. *An Economic Theory of Democracy*. New York. Harper and Row.

ECKSTEIN, SUSAN. 1977. *The Poverty of Revolution: The State and the Urban Poor in Mexico*. Princeton, N. J. Princeton University Press.

EUBEN, J. PETER. 1970. *Political Science and Political Silence*. In P. Green and S. Levinson, eds., *Power and Community*. New York. Vintage Books.

FAGEN, RICHARD R. 1972. *Continuities in Cuban Revolutionary Politics*. *Monthly Review* 23 (Apr.): 24-48.

FAGEN, RICHARD R. and WILLIAM S. TUOHY. 1972. *Politics and Privilege in a Mexican City*. Stanford: Stanford University Press.

FEIERABEND, IVO K. and ROSALIND L. FEIERABEND. 1966. *Aggressive Behaviors within Polities, 1948-1962: A Cross National Study*. *Journal of Conflict Resolution* 10 (Sept.): 249-71.

FEIERABEND, IVO K., ROSALIND L. FEIERABEND and BETTY A. NESVOLD. 1969. *Social Change and Political Violence: Cross-National Patterns*. In H. D. Graham and T. R. Gurr, eds., *Violence in America: Historical and Comparative Perspectives*. Washington, D. C. National Commission on the Causes and Prevention of Violence.

FISHEL, JOHN T. 1976. *Modes of Participation in a Limited Democracy: A Highland District in Peru*. Paper presented to the Seminar on the Faces of Participation in Latin America: A New Look at Citizen Action in Society, San Antonio, Texas (12-13 Nov.). *Communal Participation in a Highland Peruvian District*. In Mitchell A. Seligson and John A. Booth, eds., *Political Participation in Latin America*, Volume II: Politics and the Poor. New York. Holmes and Meier Publishers, forthcoming.

FITZGIBBON, RUSSELL H. 1957. *The Party Potpourri in Latin America*. *Western Political Quarterly* 10 (Mar.): 3-22.

FLORES OLEA, VICTOR. 1967. *On Political Science in Latin America: Viewpoints*. In Manuel Diegues Junior and Bryce Wood, eds., *Social Science in Latin America*. New York. Columbia University Press.

FORMAN, SHEPARD. 1971. *Disunity and Discontent: A Study of Peasant Political Movements in Brazil*. *Journal of Latin American Studies* 3 (May): 3-24. 1975. *The Brazilian Peasantry*. New York. Columbia University

Press. 1976. The Extent and Significance of Peasant Political Participation in Brazil. Paper presented at the Seminar on the Faces of Participation in Latin America: A New Look at Citizen Action in Society, San Antonio, Texas (12-13 Nov.).

GIL, FEDERICO and CHARLES PARRISH. 1965. The Chilean Presidential Election of September 4, 1964. Washington, D.C. Institute for the Comparative Study of Political Systems.

GOLDRICH, DANIEL; RAYMOND B. PRATT, and C. R. SCHULLER. 1967. *The Political Integration of Lower-Class Urban Settlements in Chile and Peru*. Studies in International Comparative Development 3:1-22.

GONZALEZ, EDWARD. 1974. *Cuba under Castro: The Limits of Charisma*. Boston. Houghton-Mifflin.

GONZALEZ, JOSE LUIS y JOHN C. HAMMOCK, eds. 1973. *Seis comunidades costarricenses*. San José, Costa Rica. Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad-Acción Internacional Técnica.

HADLEY, PAUL E. 1958. *Latin America: Retreat from Violence?* Western Political Quarterly 11 (June): 385-87.

HANDELMAN, HOWARD. 1975a. *The Political Mobilization of Urban Squatter Settlements: Santiago's Recent Experience and Its Implications for Urban Research*. LARR 10, no. 2 (Summer): 35-72. 1975b. *Struggle in the Andes: Peasant Political Mobilization in Peru*. Austin: University of Texas Press. *Unionization, Ideology and Political Participation within the Mexican Working Class*. In Mitchell A. Seligson and John A. Booth, eds. *Political Participation in Latin America, Volume II: Politics and the Poor*. New York. Holmes and Meier, forthcoming.

HANSEN, ROGER D. 1971. *The Politics of Mexican Development*. Baltimore. Johns Hopkins University Press.

HARKNESS, SHIRLEY and PATRICIA PINZON DE LEWIN. 1975. *Women, the Vote, and the Party in the Politics of the Colombian National Front*. Journal of Interamerican Studies and World Affairs 17 (Nov.): 439-64.

HOROWITZ, IRVING LOUIS. 1965. *Carisma del partido: Un análisis comparativo de las prácticas y principios políticos de las naciones del Tercer Mundo*. América Latina 8 (enero-marzo): 77-100.

HUNTINGTON, SAMUEL P. 1968. *Political Order un Changing Societies*. New Haven. Yale University Press.

HUNTINGTON, SAMUEL P. and JOAN M. NELSON. 1976. *No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*. Cambridge, Mass. Harvard University Press.

ISUANI, ERNESTO ALDO and RUBEN ALBERTO CERVINI. 1975. *Análisis del voto de izquierda en Santiago de Chile: un modelo causal*. LARR 10, No. 3 (Fall): 103-20.

KIM, JAE-ON, NORMAN H. NIE and SIDNEY VERBA. 1974. *The Amount and Concentration of Political Participation*. Political Methodology 1 (Spring): 105-32.

KLING, MERLE. 1964. *The State of Research on Latin America, Political Science*. In Charles Wagley, ed., *Social Science Research on Latin America*. New York, Columbia University Press.

LANDSBERGER, HENRY A. and BOBBY M. GIERISCH. *Political and Economic Activism: Peasant Participation in the Ejidos of the Comarca Lagunera of Mexico*. In Mitchell A. Seligson and John A. Booth, eds., *Political Participation in Latin America, Volume II: Politics and the Poor*. New York. Holmes and Meier, forthcoming.

LANE, ROBERT E. 1959. *Political Life*. Glencoe, Ill.: The Free Press.

LEEDS, ANTHONY and ELIZABETH LEEDS. 1976. *Accounting for Behavioral Differences: Three Political Systems and the Responses of Squatters in Brazil, Peru and Chile*. In J. Walton and L. Masotti, eds., *The City in Comparative Perspective*. New York. Sage-Halstead.

LEOGRANDE, WILLIAM M. 1978. *Mass Political Participation in Socialist Cuba*. In John A. Booth and Mitchell A. Seligson, eds., *Citizen, State, and Political Participation in Latin America*. New York. Holmes and Meier.

LENER, DANIEL. 1958. *The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East*. Glencoe, Ill. The Free Press.

LOPEZ PINTOR, RAFAEL. 1969. *Algunos aspectos de la participación política en Chile*. Santiago. Instituto de Administración.

LOTT, LEO B. 1957. *The 1952 Venezuelan Elections: A Lesson for 1957*. *Western Political Quarterly* 10 (Sept.): 541.

LOVEMAN, BRIAN. 1976. *Struggle in the Countryside: Politics and Rural Labor in Chile, 1919-1973*. Bloomington. Indiana University Press. *Political Participation and Rural Labor in Chile*. In Mitchell A. Seligson and John A. Booth, eds., *Political Participation in Latin America, Volume II: Politics and the Poor*. New York. Holmes and Meier, forthcoming.

MCCLINTOCK, CYNTHIA. 1976a. *Self-Management and Political Participation in Peru, 1969-1975: The Corporatist Illusion*. Ph.D. dissertation, Massachusetts Institute of Technology. 1976b. *Socioeconomic Status and Political Participation in Peru: The Impact of Agrarian Cooperatives, 1969-1975*. Paper presented to the Seminar on the Faces of Participation in Latin America, A New Look at Citizen Action in Society, San Antonio, Texas (12-13 Nov.).

MCDONALD, RONALD H. 1971. *Party Systems and Elections in Latin America*. Chicago. Markham. 1972a. *Electoral Fraud and Regime Control in Latin America*. *Western Political Quarterly* 25 (Mar.): 81-93. 1972b. *Electoral Politics and Uruguayan Political Decay*. *Inter-American Economic Affairs* 26 (Summer): 25-45.

MCEWEN, WILLIAM J. 1975. *Changing Rural Society: A Study of Communities in Bolivia*. New York. Oxford University Press.

MABRY, DONALD J. 1973. *Mexico's Acción Nacional: A Catholic Alternative to Revolution*. Syracuse. Syracuse University Press.

MALLOY, JAMES M. 1970. *Bolivia: The Uncompleted Revolution*. Pittsburgh. University of Pittsburgh Press. 1977. *Social Security Policy and the Working Class in Twentieth Century Brazil*. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 19 (Feb.): 35-60.

MARTZ, JOHN D. 1964. *Dilemmas in the Study of Latin American Political Parties*. *Journal of Politics* 26 (Aug.): 509-31. 1967. *Costa Rica Electoral Trends, 1953-1966*. *Western Political Quarterly* 20 (Dec.): 888-909. 1972. *Ecuador: Conflicting Political Culture and the Quest for Progress*. Boston. Allyn and Bacon.

MARTZ, JOHN D., and ENRIQUE A. BALOYRA. 1976. *Electoral Mobilization and Public Opinion. The Venezuelan Campaign of 1973*. Chapel Hill. University of North Carolina Press.

MATHIASON, JOHN R. 1972. *Patterns of Powerlessness among the Urban Poor: Toward the Use of Mass Communications for Rapid Social Change*. *Studies in Comparative International Development* 7 (Spring): 64-88.

MATTHEWS, DONALD R., and JAMES W. PROTHRO. 1966. *Negroes and the New Southern Politics*. New York. Harcourt, Brace and World.

MESA-LAGO, CARMELO. *Social Security in Latin America: Pressure Groups, Stratification, and Inequality*. Pittsburgh. The University of Pittsburgh Press, forthcoming.

MILBRATH, LESTER W. 1965. *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?* Chicago. Rand McNally.

MILBRATH, LESTER W., and M. L. GOEL. 1977. *Political Participation: How and Why Do People Get Involved in Politics?* (Rev. ed.). Chicago. Rand McNally.

MOORE, RICHARD J. T. 1977. *Assimilation and Political Organization among the Urban Poor: The Case of Guayaquil*. Ph.D. dissertation, The University of Texas at Austin. *The Urban Poor in Guayaquil, Ecuador: Modes, Correlates, and Context of Political Participation*. In Mitchell A. Seligson and John A. Booth, eds., *Political Participation in Latin America, Volume II: Politics and the Poor*. New York. Holmes and Meier, forthcoming.

MORENO, JOSE A. 1970. *Barrios in Arms: Revolution in Santo Domingo*. Pittsburgh. University of Pittsburgh Press.

NEUSE, STEVEN M. 1978. *Voting in Chile: The Feminine Response*. In John A. Booth and Mitchell A. Seligson, eds., *Political Participation in Latin America, Volume I: Citizen and State*. New York. Holmes and Meier.

NORTH, LIISA. 1975. *The Peruvian Aprista Party and Haya de la Torre: Myths and Realities*. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 17 (May): 245-53.

NUN, JOSE. 1967. *Notes on Political Science and Latin America*. In Manuel Diegues Junior and Bryce Wood, eds., *Social Science in Latin America*. New York. Columbia University Press.

OLSON, MANCUR. 1968. *The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups*. New York. Schocken Books.

PALMER, DAVID SCOTT. 1973. "Revolution From Above": Military Government and Popular Participation in Peru, 1968-1972. Ithaca. New York. Cornell University Latin American Dissertation Series no. 47.

PALMER, DAVID SCOTT and KEVIN JAY MIDDLEBROOK. 1976. *Corporatist Participation under Military Rule in Peru since 1968*. In *Peruvian Nationalism: A Corporatist Revolution*. New Brunswick, N.J. Transaction Books.

PALMER, DAVID SCOTT and JORGE RODRIGUEZ BERUFF. 1972. *The Peruvian Military Government: The Problems of Popular Participation*. *Bulletin: Institute of Development Studies, Military Regimes* 4 (Sept.): 4-15.

PARRISH, CHARLES J., ARPAD J. VON LAZAR, and JORGE TAPIA VIDELA. 1967. *The Chilean Congressional Election of March 7, 1965*. Washington, D.C. Institute for Comparative Study of Political Systems.

PATEMAN, CAROLE. 1970. *Participation and Democratic Theory*. Cambridge. Cambridge University Press.

PEATTIE, LISA R. 1968. *The View from the Barrio*. Ann Arbor. University of Michigan Press.

PERLMAN, JANICE. 1975. *Rio's Favelas and the Myth of Marginality*. *Politics and Society* 5, no. 2, págs. 131-60. 1976. *The Myth of Marginality: Urban Poverty and Politics in Rio de Janeiro*. Berkeley. University of California Press.

PETRAS, JAMES. 1968. *Revolution and Guerilla Movements in Latin America: Venezuela, Guatemala, Colombia and Peru*. In James Petras and Maurice Zeitlin, eds., *Latin America: Reform or Revolution*. Greenwich, Conn. Fawcett. 1970. *Politics and Social Forces in Chilean Development*. Berkeley. University of California Press.

PETRAS, JAMES and MAURICE ZEITLIN, eds. 1968. *Latin America: Reform or Revolution?* Greenwich, Conn. Fawcett.

PORTES, ALEJANDRO. 1969. *Cuatro poblaciones*. Santiago. Monograph Report to the University of Wisconsin Sociology of Development Program. 1971. *Political Primitivism, Differential Socialization and Lower-Class Leftist Radicalism*. *American Sociological Review* 36 (Oct.): 820-35. 1972. *Rationality in the Slum: An Essay on Interpretive Sociology*. *Comparative Studies in Society and History* 14 (June): 268-86. 1973. *The Factorial*

Structure of Modernity: Empirical Replications and a Critique. American Journal of Sociology 79 (July): 15-43. 1974. *Modernity and Development: A Critique.* Studies in Comparative International Development 8 (Fall): 247-79. 1976. *The Politics of Urban Poverty.* In A. Portes and J. Walton, Urban Latin America. Austin, University of Texas Press.

PORTES, ALEJANDRO and JOHN WALTON. 1976. Urban Latin America: The Political Condition from Above and Below. Austin. University of Texas Press.

POWELL, JOHN DUNCAN. 1970. *Peasant Society and Clientelist Politics.* American Political Science Review 64 (June): 411-25. 1971. Political Mobilization of the Venezuelan Peasant. Cambridge. Harvard University Press.

PROTHRO, JAMES W. and PATRICIO CHAPARRO. 1975. *Public Opinion and the Movement of the Chilean Government to the Left, 1952-1970.* In Arturo Valenzuela and Samuel Valenzuela, eds., Chile: Politics and Society. New Brunswick, N.J. Transaction Books.

RANIS, PETER. 1968. *A Two-Dimensional Typology of Latin American Political Parties.* Journal of Politics 30 (Aug.): 798-832.

RAY, TALTON F. 1969. The Politics of the Barrios of Venezuela. Berkeley. University of California Press.

ROBERTS, BRYAN R. 1973. Organizing Strangers: Poor Families in Guatemala City. Austin. University of Texas Press.

ROSENBERG, MARK B. and JAMES M. MALLOY. 1978. *Indirect Participation Versus Social Equity in the Evolution of Latin American Social Security Policy.* In John A. Booth and Mitchell A. Seligson, eds., Political Participation in Latin America, Volume I: Citizen and State. New York. Holmes and Meier.

SALISBURY, ROBERT H. 1975. *Research on Political Participation.* American Journal of Political Science 19 (May): 323-41.

SCHMITT, KARL M. 1969. *Congressional Campaigning in Mexico: A View from the Provinces.* Journal of Interamerican Studies and World Affairs 11 (Jan.): 93-110.

SCHMITT, KARL M. and DAVID BURKS. 1963. Evolution or Chaos: Dynamics of Latin American Government and Politics. New York. Praeger.

SELIGSON, MITCHELL A. 1977. *Agrarian Policy in Dependent Societies: Costa Rica.* Journal of Interamerican Studies and World Affairs 19 (May): 201-32. 1978. *Development and Participation: The Impact of Context in Costa Rica.* In John A. Booth and Mitchell A. Seligson, eds., Political Participation in Latin America, Volume I: Citizen and State. New York. Holmes and Meier. *Unconventional Political Participation, Cynicism, Powerlessness and The Latin American Peasant.* In Mitchell A. Seligson and John A. Booth, eds., Political Participation in Latin America, Volume II: Politics and the Poor. New York. Holmes and Meier, forthcoming.

SELIGSON, MITCHELL A. and JOHN A. BOOTH. 1976. *Political Participation in Latin America: An Agenda for Research.* Latin American Research Review 11, no. 3 (Fall): 95-119. *Political Participation, Development, and the Poor in Latin America.* In Mitchell A. Seligson and John A. Booth, eds., Political Participation in Latin America, Volume II: Politics and the Poor. New York. Holmes and Meier, forthcoming (a). *Structure and Levels of Political Participation in Costa Rica: Comparing Peasants to City Dwellers.* In Mitchell A. Seligson and John A. Booth, eds., Political Participation in Latin America, Volume II: Politics and the Poor. New York. Holmes and Meier, forthcoming (c).

SELIGSON, MITCHELL A. and JOHN A. BOOTH. eds. Political Participation in Latin America, Volume II: Politics and the Poor. New York. Holmes and Meier, forthcoming (b). [Published in 1979].

SINDING, STEVEN. 1972. *The Evolution of Chilean Voting Patterns: A Reexamination of Some Old Assumptions.* Journal of Politics 34 (Aug.): 774-96.

- SINGELMANN, PETER. 1975. *The Closing Triangle: Critical Notes on a Model for Peasant Mobilization in Latin America*. *Comparative Studies in Society and History* 17 (Oct.): 389-409.
- SOARES, GLAUCIO A. D. 1967. *Intellectual Identity and Political Ideology among University Students*. In S. M. Lipset and A. Solari, eds., *Elites in Latin America*. New York. Oxford.
- TAYLOR, PHILIP B., JR. 1954. *Interparty Cooperation and Uruguay's 1952 Constitution*. *Western Political Quarterly* 7 (Sept.): 391-400. 1960. *The Mexican Elections of 1958: Affirmation of Authoritarianism?* *Western Political Quarterly* 13 (Sept.): 722-44.
- TOURAINÉ, ALAIN and DANIEL PECAUT. 1970. *Working Class Consciousness and Economic Development in Latin America*. In Irving Louis Horowitz, ed., *Masses in Latin America*. New York. Oxford University Press.
- TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES. 1970. *Cómputo de votos y declaratorias de elección*. San José, Costa Rica.
- TUGWELL, FRANKLIN. 1965. *The Christian Democrats of Venezuela*. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 7 (Apr.): 245-67.
- TULLOCK, GORDON. 1968. *Toward a Mathematics of Politics*. Ann Arbor. University of Michigan Press.
- VALENZUELA, ARTURO. 1977. *Political Participation, Agriculture, and Literacy: Communal Versus Provincial Voting Patterns in Chile*. *LARR* 12, no. 1 (Spring): 105-14.
- VERBA, SIDNEY and NORMAN H. NIE. 1972. *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. New York. Harper & Row.
- VERBA, SIDNEY, NORMAN H. NIE, ANA BARBIC, GALEN IRWIN, HENK MOLLEMAN, and GOLDIE SHABAD. 1973. *The Modes of Participation: Continuities in Research*. *Comparative Political Studies* 6 (July): 235-50.
- VERBA, SIDNEY, NORMAN H. NIE and JAE-ON KIM. 1971. *The Modes of Democratic Participation: A Cross-National Comparison*. Beverly Hills, Calif. Sage Publications.
- WALTON, JOHN. 1976. *Elites and the Politics of Urban Development: A Comparative Study of Four Cities*. In A. Portes and J. Walton, *Urban Latin America*. Austin. University of Texas Press.
- WEINER, MYRON. 1971. *Political Participation: Crisis of the Political Process*. In Leonard Binder, et. al., *Crises and Sequences in Political Development*. Princeton, N.J. Princeton University Press.
- WEINSTEIN, MARTIN. 1975. *Uruguay: The Politics of Failure*. Westport, Conn. Greenwood Press.
- WELLHOFER, E. SPENCER. 1975. *Political Party Development in Argentina: The Emergence of Socialist Party Parliamentarianism*. *Journal of Interamerican Studies and World Affairs* 17 (May): 153-74.
- WHYTE, WILLIAM F. 1969. *Rural Peru—Peasants as Activists*. *Transaction* (Nov.): 37-47.
- WIARDA, HOWARD J. 1974. *Social Change, Political Development and the Latin American Tradition*. In Howard J. Wiarda, ed., *Politics and Social Change in Latin America: The Distinct Tradition*. Amherst University of Massachusetts Press.
- WILLEMS, EMILIO. 1975. *Latin American Culture: An Anthropological Approach*. New York. Harper and Row.
- WILLIAMS, EDWARD J. 1967. *Latin American Christian Democratic Parties*. Knoxville, Tenn. University of Tennessee Press.

WOY, SANDRA L. 1978. *SINAMOS: Infrastructure of Participation in Peru*. In John A. Booth and Mitchell A. Seligson, eds., *Political Participation in Latin America, Volume I: Citizen and State*. New York. Holmes and Meier.

ZEITLIN, MAURICE. 1970. *Revolutionary Politics and the Cuban Working Class*. New York. Harper and Row.